

Septiembre 24 de 1947 (Mañana)

41ª REUNION — SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia de los doctores Ricardo C. Guardo y Joaquín Díaz de Vivar

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Roberto I. Lascano

| DIPUTADOS PRESENTES: | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Alfaro, Oscar E. | Del Mazo, Gabriel | Moreno, José Luis | Tommasi, Victorio M. |
| Alfaro, Juan Daniel | Dellepiane, Luis | Mosset Iturraspe, Mario | Toro, Ricardo |
| Alvarez, Néstor | Díaz de Vivar, Joaquín | Mujica, Rodolfo | Urdapilleta, Oscar C. |
| Alvarez Pereyra, Manuel | Díaz, Manuel M. | Noriega, Juan J. | Valdez, Celestino |
| Alvarez Pérez, Vicente | Dri, Roberto | Obeid, Leonardo | Velloso Colombres, Manuel F. |
| Allub, Rosendo | Dufau, Juan Adolfo | Orozco, Modesto V. | Vergara, Amando |
| Andreotti, Antonio | Fajre, José Benito | Osinalde, Rafael | Visca, José Emilio |
| Antille, Diógenes C. | Fernández, Baltasar S. | Ottonello, Benito J. | Vischi, Albino |
| Aráoz, Ricardo E. | Fernández, Hernán S. | Pastor, Reynaldo A. | Zanoni, Pedro P. |
| Arévalo Cabeza, Jabel | Ferrando, Manuel P. | Peña Guzmán, Solano | Zara, Edmundo Leopoldo |
| Argañá, José M. | Ferrer, Modesto | Perea, Pedro J. | Zinny, Mario |
| Arias, José | Fregossi, Luis J. | Pérez de la Torre, Horacio | |
| Ayala López Torres, Francisco | Galvagni, Saverio M. | Petruzzi, Miguel | AUSENTES, CON LICENCIA: |
| Bagnasco, Vicente | Garaguso, Bernardino Hipólito | Pirani, Antonio S. | Beretta, Eduardo |
| Balbin, Ricardo | Garay, Marcelino S. | Pomar, Gregorio | Bustos Fierro, Raúl |
| Barreiro, Carmelo | García, Manuel | Ponce, Angel L. | Cámpora, Héctor J. |
| Baulina, Angel V. | García Quiroga, Alejandro | Pueyrredón, Horacio Honorio | Errecart, Juan A. |
| Benítez, Antonio J. | González Funes, Tomás | Raña, Eduardo Antonio | Fronzizi, Arturo |
| Bertini, Amadeo | Graña Etcheverry, Manuel | Ravignani, Emilio | Gericke, Carlos Gustavo |
| Bonazzola, Romeo E. | Guardo, Ricardo C. | Repetto, Agustín | Palacio Ernesto |
| Boullosa, Emilio M. | Guillot, César Joaquín | Reyes, Cipriano | San Millán, Ricardo Antonio |
| Braga, Juan Carlos | Jofré Hernán R. | Reynés, Leandro R. | Sarmiento, Manuel |
| Brugnerotto, Juan N. D. | Kees, Gaspar | Ricagno, Roberto | |
| Busaniche, Julio J. | Klix López, Guillermo | Rodríguez de la Torre, Raúl | AUSENTES, CON AVISO: |
| Calcagno, Alfredo D. | Larco, Ricardo | Rodríguez, Manuel | Ayerbe, Lázaro Balbino |
| Cámara, Guillermo F. | Lasciar, Guillermo F. | Rodríguez, Nerio M. | Pontieri, Silverio |
| Camus, Eloy P. | Lencinas, José R. | Rojas, Absalón | Uranga, Raúl L. |
| Candiotti, Alberto M. | Letamendi, Balbino (h.) | Rojas, Nerio | |
| Casal, Raúl M. | Liccaga, Félix J. | Rossi, José | AUSENTES, SIN AVISO: |
| Casabonlega, Armando | López Serrot, Oscar | Rouggier, Valerio S. | Alvarez Vocos, Enrique |
| Colombo, Eduardo | Mac Kay, Luis R. | Rubino, Sidney Nicolás | Cleve, Ernesto |
| Cooke, John William | Maineri, D. Jacinto | Rumbo, Eduardo I. | Decker, Rodolfo A. |
| Córdova, J. Salvador | Malecek, José Enrique | Sammartino Ernesto E. | Díaz Colodrero, Justo |
| Corvalán, Luciano R. | Mántaras, Manuel J. | Santander, Silvano | Giménez Vargas, Francisco |
| Cufre, Orlando H. | Mariategui, Angel S. | Saravia, Teodoro S. | Mendiando, F. Daniel |
| Curchod, Amado J. | Marotta, José | Sarraute, José Roberto | Pasquini, José P. D. |
| Degreef, Juan Ramón | Martínez Guerrero, Guillermo | Sobral, Antonio | Polizzi, Juan |
| De la Torre, Juan | Martínez Luque, Enrique | Solanet, Emilio | Vanasco, Julio A. |
| Del Carril, Emilio Donato | Messina, Humberto | Sustaita Seeber, Héctor | Villafañe, José María |
| | Montes de Oca, Carlos | Tejada, Ramón Washington | |
| | Montiel, Alcides E. | Tesorieri, José V. | |

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Convocatoria a sesión extraordinaria.
- 3.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Gericke, Bustos Fierro y Fronzizi.
- 4.—Fijación del orden de labor de la Honorable Cámara.
- 5.—Consideración del despacho de la Comisión de Instrucción Pública en el proyecto de ley de

- creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se sanciona.
- 6.—Consideración del despacho de la Comisión de Asistencia y Previsión Social en el proyecto de ley, en revisión, por el que se modifica el régimen de previsión para el personal de la Marina Mercante, Aeronáutica Civil y Afines. Se sanciona.
 - 7.—Indicación del señor diputado Rodríguez (M.) de que se trate inmediatamente el despacho de la Comisión de Asistencia y Previsión Social en el proyecto de ley por el que se declaran

servicios privilegiados, a los efectos de la jubilación, los prestados por los obreros estibadores de bodegas y cámaras frigoríficas.

8.—Consideración del despacho de la Comisión de Asistencia y Previsión Social a que se refiere el número 7 de este sumario. Se sanciona.

9.—Consideración del despacho de las comisiones de Instrucción Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre estatuto del personal docente de establecimientos particulares y sobre equiparación de sueldos con el personal de establecimientos oficiales.

—En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de septiembre de 1947, siendo las 9:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rumbo. — Hago indicación de que se siga llamando durante media hora más, hasta que se pueda integrar el quórum.

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

2

CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA

—A las 9 y 20:

Sr. Presidente (Guardo). — Queda abierta la sesión extraordinaria con la presencia de ochenta señores diputados.

Por Secretaría se va a dar lectura a los documentos relacionados con la citación a sesión extraordinaria.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Ha sido formulado el siguiente pedido de sesión extraordinaria:

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1947.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Ricardo C. Guardo.

Nos dirigimos al señor presidente con el objeto de solicitar una sesión extraordinaria de la Honorable Cámara para el día miércoles 24 del corriente, a las 8 y 30, a los fines de considerar los siguientes órdenes del día:

Nº 419.—Creación de una Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

„ 420.—Modificación ley 12.911. Ratificación decretos leyes de aeronáutica.

„ 311.—Comisión Asistencia y Previsión Social, modificación primera parte, inciso i), previsión, inciso j), artículo 12, decreto 6.895/46, ley 12.911, régimen de previsión para el personal de la Marina Mercante y Aeronáutica.

„ 478.—Tasa de aeródromos.

„ 394.—Decretos de aeronáutica. Reservado.

„ 487.—Estatuto de los docentes particulares.

Saludamos al señor presidente muy atentamente.

*Oscar E. Albrieu. — José Emilio Visca.
— José Marotta. — Ramón Washington
Tejada. — Juan Adolfo Dufau. — José
M. Argaña. — John William Cooke.*

Se recibió también el siguiente pedido de citación:

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1947.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, doctor Ricardo C. Guardo.

De nuestra consideración:

En mérito a lo que dispone el artículo 35 del reglamento de la Honorable Cámara, solicitamos a usted se sirva citar al cuerpo que preside para celebrar sesiones extraordinarias el próximo día miércoles 24 del corriente mes, a las 8 y 30, para tratar el estatuto para los docentes particulares, a cuyo efecto se cursarán las citaciones reglamentarias.

Saludan al señor presidente con su mayor consideración.

*Luis Dellepiane. — Oscar López Serrot.
— Ernesto E. Sammartino. — Antonio
Sobral. — Ricardo Balbín. — José R.
Lencinas. — Solano Peña Guzmán. —
Alberto M. Candiotti. — Angel V. Bau-
lina. — Tomás González Funes — Luis
R. Mac Kay. — D. Jacinto Maineri.*

El señor presidente dictó la siguiente resolución:

Vistas las notas precedentes, en las que varios señores diputados pertenecientes al bloque Peronista y al bloque parlamentario de la Unión Cívica Radical solicitan se convoque a la Honorable Cámara a una sesión extraordinaria, para el día miércoles 24 del corriente a la hora 8 y 30, a los efectos de tratar diversos asuntos y considerando que las peticiones formuladas están encuadradas dentro de los artículos 30 y 35 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados,

9

ESTATUTO DEL DOCENTE DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES

(Orden del día número 487)

Honorable Cámara:

Vuestras comisiones de Instrucción Pública y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre Estatuto del Docente de Establecimientos Particulares; y los proyectos de ley de los señores diputados Sobral y López Serrrot sobre Estatuto del Personal Directivo, Docente y Administrativo de la Enseñanza Privada; y Moreno y Saravia, sobre equiparación de sueldos del personal de establecimientos educacionales incorporados con el de establecimientos nacionales comprendidos en el régimen de la ley 12.914; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, con las modificaciones siguientes:

Artículo 2º, como agregado al final del inciso a):

«tanto de validez nacional de sus títulos, como de régimen autónomo».

Artículo 3º, substitúyese por el siguiente:

Los establecimientos de enseñanza privada que a la fecha de la sanción de la presente ley gocen de los beneficios de la incorporación a la enseñanza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, los de validez nacional de sus títulos como los de régimen autónomo, así

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1947.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

Tengo el honor de comunicar al señor presidente, que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I. — De los establecimientos

Artículo 1º — Todos los establecimientos privados, de enseñanza, cualquiera sea su naturaleza y organización, ajustarán sus relaciones con

como los que actúan fiscalizados por el Consejo Nacional de Educación, pasarán automáticamente a la categoría de «adscritos a la enseñanza oficial» y mantendrán tal carácter, mientras cumplan las normas en vigor y las que en adelante se dicten.

Artículo 15, substitúyese por el siguiente:

Las sanciones y remociones decretadas por razones técnicas o de inconducta por el organismo oficial pertinente no darán lugar a ninguna indemnización.

Artículo 25, substitúyese por el siguiente:

A partir del 1º de enero de 1948, no se acordarán nuevas subvenciones, ni se pagarán en lo sucesivo las que hayan sido acordadas, en concepto de sueldos para la enseñanza que imparten, a colegios o instituciones de enseñanza privada, incluidos en el inciso a) del artículo 2º. Los importes correspondientes ingresarán en la cuenta especial que se habilitará para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Sala de las comisiones, 16 de septiembre de 1947.

Juan Ramón Degreef. — Emilio Donato del Carril. — Angel S. Mariategui. — José V. Tesorieri. — Antonio Sobral. — Reynaldo A. Pastor. — Sidney Nicolás Rubino. — José Emilio Visca. — Armando Casas Noblega. — Raúl Bustos Fierro. — Edmundo Leopoldo Zara. — Teodoro S. Saravia. — Jabel Arévalo Cabeza. — Amanda Vergara. — Humberto Messina. — Alfredo D. Calcagno. — Luis Dellepiane. — José Luis Moreno.

Despacho de las comisiones

Sanción del Honorable Senado

Despacho de las comisiones

el Estado y con su personal a las prescripciones de la presente ley.

Art. 2º — A los efectos de la aplicación de esta ley, el Poder Ejecutivo llevará un registro de todos los establecimientos privados de enseñanza, y de su personal, y clasificará a los establecimientos en:

- a) *Adscritos a la enseñanza oficial*: establecimientos privados de enseñanza primaria, fiscalizados por el Consejo Nacional de Educación, y de enseñanza secundaria, normal o especial, incorporados a la enseñanza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública;
- b) *Libres*: establecimientos privados de enseñanza secundaria, normal o especial que, siguiendo los planes y programas oficiales, no estén comprendidos en el apartado anterior;
- c) *Establecimientos privados, de enseñanza en general*: establecimientos privados, de enseñanza, directa o por correspondencia, no incluidos en los incisos a) y b).

Art. 3º — Los establecimientos de enseñanza privada que a la fecha de la sanción de la presente ley gocen de los beneficios de la incorporación a la enseñanza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, así como los que actúan fiscalizados por el Consejo Nacional de Educación, pasarán automáticamente a la categoría de «adscritos a la enseñanza oficial» y mantendrán tal carácter, mientras cumplan las normas en vigor y las que en adelante se dicten.

Art. 4º — En los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial», a cuyo sostenimiento contribuya el Estado, no se autorizará la creación de nuevas divisiones de un mismo curso, ni la formación de nuevas secciones de un mismo grado, sin encontrarse cubiertas las existentes con el máximo de alumnos determinado por las disposiciones en vigor. Tampoco podrán autorizarse secciones anexas.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento a seguir para el ingreso y promoción de los alumnos de los establecimientos adscritos a la enseñanza oficial, en sus distintos ciclos y etapas de los planes de estudio.

Art. 6º — A los efectos del registro a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, el Poder Ejecutivo establecerá un plazo no mayor de 60 días para que los establecimientos privados de enseñanza, presenten la declaración documentada que se les requiera.

Artículo 2º, como agregado al final del inciso a):

«tanto de validez nacional de sus títulos, como de régimen autónomo».

Artículo 3º, substitúyese por el siguiente:

Los establecimientos de enseñanza privada que a la fecha de la sanción de la presente ley gocen de los beneficios de la incorporación a la enseñanza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, los de validez nacional de sus títulos como los de régimen autónomo, así como los que actúan fiscalizados por el Consejo Nacional de Educación, pasarán automáticamente a la categoría de «adscritos a la enseñanza oficial» y mantendrán tal carácter, mientras cumplan las normas en vigor y las que en adelante se dicten.

Sanción del Honorable Senado

Despacho de las comisiones

II. — *Del personal*

Art. 7º — El personal directivo, docente, docente auxiliar, administrativo, de maestranza y de servicio de todos los establecimientos privados de enseñanza, tienen derecho:

- a) A la estabilidad, siempre que no estuviere en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, con las excepciones que se determinan en el artículo 13 de la presente ley;
- b) Al sueldo y salario mínimos;
- c) A la bonificación por antigüedad;
- d) A la inamovilidad en la localidad, salvo conformidad escrita del interesado.

Art. 8º — Para ser designado en cargos directivos o docentes, en los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial» se exigirá título habilitante.

En aquellas localidades donde no se cuente con docentes que posean título habilitante para la enseñanza secundaria, normal o especial, se podrá autorizar la designación de maestros normales nacionales, o egresados de escuelas técnicas, según el caso, con carácter interino, los que quedarán habilitados para la enseñanza de la asignatura si en el transcurso de tres años merecieren concepto profesional favorable.

Art. 9º — El personal será designado por los respectivos establecimientos de enseñanza y, en el caso particular de los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial», con aprobación de los organismos oficiales que corresponda, la que será indispensable para perfeccionar la designación.

Art. 10. — Producida la vacancia de un cargo docente, el establecimiento privado deberá designar al titular dentro de un plazo no mayor de noventa días, no computándose, a este efecto, los períodos de vacaciones.

Art. 11. — El personal directivo y docente de los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial», tendrá los mismos deberes, se ajustará a las mismas incompatibilidades y gozará de los mismos derechos establecidos para el personal de los establecimientos oficiales.

En ningún caso, el personal de un establecimiento adscrito podrá desempeñar cargo u horas en el establecimiento oficial al que estuviere incorporado.

Art. 12. — Los servicios prestados en establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial», antes o después de la sanción de la presente ley, serán computables para optar a aquellos cargos y categorías de la enseñanza oficial que requieran antigüedad en la docencia.

Sancion del Honorable Senado

Despacho de las comisiones

Art. 13. — El personal sólo podrá ser removido, sin derecho a preaviso ni indemnización, por causas de inconducta, mal desempeño de sus deberes o incapacidad física o mental, previa substanciación del correspondiente sumario por autoridad oficial competente, en el que se garantizará la inviolabilidad de la defensa.

Art. 14. — En los casos de despido por causas distintas de las taxativamente enumeradas en el artículo anterior, se aplicarán las disposiciones de los artículos 157 y afines del Código de Comercio.

Los pagos en concepto de preaviso y/o de indemnización serán por cuenta exclusiva del establecimiento privado y, en el caso de los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial», no se computarán entre los gastos a cubrir con el porcentaje de sus ingresos arancelarios, a que se refiere el artículo 21.

Art. 15. — Las sanciones y remociones decretadas por el organismo oficial pertinente no darán lugar a ninguna indemnización.

Art. 16. — En caso de cambio de planes de estudio, supresiones de cursos, divisiones o grados, previa autorización del organismo técnico respectivo y comunicación al Consejo Gremial de Enseñanza Privada, quedarán en disponibilidad, sin goce de sueldo, los docentes del establecimiento con menor antigüedad en la asignatura o en el grado.

No podrá evitarse la situación de disponibilidad de docentes mediante la quita de horas, cambios de asignatura o de turno, sin la conformidad escrita de los afectados.

Art. 17. — Al producirse vacantes o crearse en el establecimiento nuevos cursos, divisiones o grados, los docentes en disponibilidad serán designados de acuerdo con sus títulos habilitantes, con prioridad a cualquier otro hasta recuperar la totalidad de su tarea docente.

III. — De los sueldos y aranceles

Art. 18. — Se establece como sueldos mínimos los siguientes:

- a) Para el personal docente de los establecimientos comprendidos en el inciso a) del artículo 2º, un sueldo mensual no inferior al 60 % del sueldo nominal que, en igualdad de especialidad, tarea y antigüedad, perciban los docentes de los establecimientos oficiales.

Los maestros de grado que presten servicios con horarios discontinuos gozarán, además, de una bonificación no

Artículo 15, substitúyese por el siguiente:

Las sanciones y remociones decretadas por razones técnicas o de inconducta por el organismo oficial pertinente, no darán lugar a ninguna indemnización.

Sanción del Honorable Senado

Despacho de las comisiones

menor del 30 % calculada sobre el sueldo básico nominal que les corresponda;

- b) Para el personal directivo, docente auxiliar, administrativo, de maestranza y de servicio, de los establecimientos incluidos en el inciso a) del artículo 2º, y para todo el personal de los establecimientos comprendidos en los incisos b) y c), del mismo artículo, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada establecerá un sueldo mensual no inferior, en ningún caso, al sueldo mayor que hubiera percibido este personal durante los dos últimos años, más un 25 % de aumento. Además, este personal gozará por cada 3 años de servicios, a partir de los 10 años de antigüedad, de una bonificación del 10 % sobre el sueldo básico nominal precedentemente establecido.

Los sueldos iniciales del personal de los establecimientos que se creen con posterioridad a la sanción de la presente ley, serán fijados, oídas las partes, por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada y gozarán de la misma bonificación prefijada, contándose los plazos desde el comienzo de sus tareas.

Art. 19. — Los sueldos establecidos por el artículo anterior, se abonarán durante los doce meses, independientemente de un sueldo anual complementario, equivalente a la 1/12 parte del total de sueldos percibidos en el respectivo año calendario.

Art. 20. — El sueldo que perciba el personal docente se entenderá, en todos los casos, como retribución por la sola prestación de los servicios específicos para que fuera designado.

Art. 21. — El Consejo Gremial de Enseñanza Privada establecerá, anualmente, el porcentaje de los ingresos por aranceles de enseñanza que los establecimientos privados destinarán al pago de los sueldos de su personal. Este porcentaje no podrá ser inferior al 50 % de dichos ingresos.

Art. 22. — Para fijar los aranceles de enseñanza que los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial» aplicarán a sus alumnos, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada los clasificará en tres categorías, teniendo en cuenta las características de la zona, el material didáctico de que dispongan y las comodidades que ofrezcan a sus alumnos y, antes del 1º de enero de cada año, deberá someter a la aprobación del Poder Ejecutivo las tarifas mínimas propuestas para cada categoría.

Estos aranceles serán percibidos únicamente durante el período lectivo establecido por los organismos técnicos respectivos.

Sanción del Honorable Senado

Despacho de las comisiones

Art. 23. — Los establecimientos privados, de enseñanza, comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 2º, comunicarán al Consejo Gremial de Enseñanza Privada los aranceles de enseñanza que fijen para sus alumnos, dentro de los 30 días de establecidos.

Art. 24. — Los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial» que demuestren que no pueden pagar los sueldos mínimos establecidos en el inciso a) del artículo 18, recibirán, y sólo para esos efectos, una contribución del Estado que no podrá ser superior a las dos terceras partes de los sueldos mínimos que se establecen en dicho artículo.

El Consejo Gremial de Enseñanza Privada, de acuerdo con las características financieras de cada establecimiento y demás circunstancias que determinen su funcionamiento, propondrá anualmente al Poder Ejecutivo, en informes fundados, el monto de esta contribución.

Para los establecimientos que impartan enseñanza exclusivamente gratuita esta contribución del Estado podrá alcanzar hasta el 80 por ciento.

Art. 25. — A partir del 1º de enero de 1948 no se acordarán nuevas subvenciones, ni se pagarán en lo sucesivo las que hayan sido acordadas en concepto de ayuda a la enseñanza que imparten, a colegios o instituciones de enseñanza privada incluidos en el inciso a) del artículo 2º. Los importes correspondientes ingresarán en la cuenta especial que se habilitará para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Art. 26. — El Consejo Gremial de Enseñanza Privada fijará anualmente el número de becas de estudio, por grado y curso, que acordará cada establecimiento adscrito subvencionado por el Estado. Estas becas serán concedidas en una proporción no menor del 10 % del número de alumnos de cada curso o grado. Asimismo, a solicitud fundada de un establecimiento «adscrito a la enseñanza oficial» subvencionado por el Estado, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada podrá autorizarlo a que exima a uno o más alumnos del pago total o parcial de los aranceles de enseñanza.

IV. — Del Consejo Gremial de Enseñanza Privada

Art. 27. — Créase el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que estará integrado por doce miembros y un presidente, a saber:

- a) Cuatro representantes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (2 por la enseñanza secundaria y normal, 1 por la enseñanza técnica y 1 por la enseñanza primaria;

Artículo 25, substitúyese por el siguiente:

A partir del 1º de enero de 1948, no se acordarán nuevas subvenciones, ni se pagarán en lo sucesivo las que hayan sido acordadas en concepto de sueldos para la enseñanza que imparten, a colegios o instituciones de enseñanza privada, incluidos en el inciso a) del artículo 2º. Los importes correspondientes ingresarán en la cuenta especial que se habilitará para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Sanción del Honorable Senado

Despacho de las comisiones

- b) Dos representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión;
- c) Dos representantes patronales de los «establecimientos adscritos a la enseñanza oficial» (1 por los establecimientos religiosos y 1 por los establecimientos laicos);
- d) Un representante patronal de los establecimientos comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 2º;
- e) Tres representantes del personal (1 por los profesores, 1 por los maestros y 1 por el restante personal).

El presidente será designado por el Poder Ejecutivo. Los representantes a que se refieren los incisos c), d) y e), serán designados por las asociaciones gremiales correspondientes.

Art. 28. — Es incompatible el ejercicio de una representación patronal o del personal, en el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, con el ejercicio de cargos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 29. — El presidente y los miembros del Consejo Gremial de Enseñanza Privada durarán tres años en sus funciones y se desempeñarán con carácter honorario. Los representantes del personal comprendidos en el inciso e) del artículo 27, pasarán a revistar en disponibilidad en sus respectivos cargos, por el tiempo que dure su representación, sin que esta situación de disponibilidad interrumpa los beneficios que la presente ley les acuerda. Sus sueldos serán abonados por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, con cargo a sus fondos propios.

Art. 30. — Todos los miembros del Consejo Gremial de Enseñanza Privada tendrán voz y voto, y el presidente tendrá facultad para decidir en caso de empate, sin estar obligado a pronunciarse en favor de ninguna de las propuestas en debate. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría y los votos serán individuales.

Art. 31. — Son atribuciones del Consejo Gremial de Enseñanza Privada:

- 1º Intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato de empleo privado en la enseñanza y de la aplicación de la presente ley;
- 2º Resolver las cuestiones relativas al sueldo, estabilidad, inamovilidad y condiciones de trabajo del personal, que no estén contempladas en el presente estatuto.

Art. 32. — De las resoluciones del Consejo Gremial de Enseñanza Privada podrá interponerse recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo.

Sanción del Honorable Senado

Despacho de las comisiones

V. — De las sanciones

Art. 33. — Las transgresiones a cualquiera de los artículos de esta ley hará responsables, solidaria e ilimitadamente, al propietario y director del establecimiento privado, a quienes se aplicarán multas de \$ 100 a \$ 10.000 moneda nacional, sin perjuicio de la inhabilitación de ambos, que podrá ser dispuesta como accesorio de la multa impuesta, y de la cancelación de la adscripción acordada al establecimiento o clausura de la escuela. El importe de la multa será destinado a integrar el aporte que el Estado tiene a su cargo para el cumplimiento de esta ley.

Art. 34. — Para la imposición de las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicará el siguiente procedimiento:

- a) Formulada una denuncia ante el Consejo Gremial por persona, entidad gremial interesada, o funcionario de las reparticiones correspondientes, se dictará resolución disponiendo la iniciación del sumario respectivo;
- b) De la denuncia se dará traslado al imputado por el término perentorio de 10 días, haciéndole saber que dentro del mismo deberá presentar su descargo ofreciendo las pruebas que hagan a su derecho, no admitiéndose ninguna medida probatoria ofrecida con posterioridad a dicho término;
- c) La prueba ofrecida será recibida por el Consejo Gremial o por la autoridad que éste designe dentro de los 15 días de vencido el término anterior;
- d) Transcurrido el mismo, se hayan o no producido las pruebas ofrecidas, o después de vencido el término a que se refiere el inciso b) sin que se haya presentado el descargo u ofrecido pruebas, el Consejo Gremial dictará resolución dentro de los 10 días, pudiendo previamente disponer las medidas que para mejor proveer considere necesarias;
- e) En caso de que la resolución impusiere multa y ésta no se obla dentro del término de 5 días, se dispondrá la ejecución judicial de la misma por vía de apremio, a cuyo efecto será título suficiente el testimonio auténtico de la resolución del Consejo Gremial de Enseñanza Privada;
- f) La resolución será apelable por el imputado dentro del término de 5 días ante la Justicia del Trabajo en la Capital Federal y territorios nacionales y ante la justicia que corresponda en las provincias, conforme a las respectivas

Sanción del Honorable Senado

Despacho de las comisiones

leyes procesales, debiendo al interponer el recurso ante el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, acreditar el pago del importe de la multa aplicada;

- g) El recurso se fundará al deducirse, no admitiéndose ante el Tribunal de Apelación la presentación de escrito ofreciendo pruebas. La resolución definitiva deberá dictarse dentro de los 15 días de recibidas las instrucciones.

Art. 35. — Son nulas y sin ningún valor las cláusulas contrarias a las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la misma. La renuncia del cargo para ser válida deberá ser ratificada por escrito ante el Consejo Gremial de Enseñanza Privada.

VI — Disposiciones transitorias

Art. 36. — El personal de los institutos privados que a la sanción de esta ley tuviera, por lo menos, un año de antigüedad, quedará confirmado automáticamente y no podrá ser separado de sus cargos sino de conformidad con lo establecido en los artículos 13, 14 y 15.

Art. 37. — En ningún caso, el personal de los establecimientos privados de enseñanza perderá las ventajas de carácter económico que hubiere obtenido con anterioridad a la sanción de la presente ley y las modificaciones que implicaren la pérdida de las mismas hará incurrir al establecimiento en el pago de la suma que se determina para la indemnización por despido.

Art. 38. — Los despidos o cesantías que se hubieran realizado o se realizaran entre el 1º de enero de 1947 y el 31 de diciembre de 1949, sin que mediara alguna de las causas establecidas en los artículos 13 ó 15, dará lugar al pago de triple indemnización.

Art. 39. — El personal docente jubilado que actualmente presta servicios en establecimientos adscritos a la enseñanza oficial, podrá continuar desempeñando sus tareas, de acuerdo con lo que establece esta ley.

Art. 40. — El régimen de las remuneraciones que establecen los artículos 18, 21, 24, así como las disposiciones de los artículos 22, 26 y correlativos, empezarán a regir a partir del 1º de enero de 1948.

Art. 41. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se harán de rentas generales, con imputación a la misma, hasta tanto se incluyan las partidas respectivas en el presupuesto general.

Art. 42. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

J. HORTENSIO QUIJANO.
Alberto H. Reales

ANTECEDENTES

I

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

A) Disposiciones generales

Artículo 1º.—Se establece el presente estatuto para el personal directivo, docente y administrativo de todos los institutos de la enseñanza privada que funcionan en el país, sean o no de régimen autónomo, siempre que, en virtud de cualquier título, gocen de validez nacional los certificados de estudio que expidan.

Art. 2º.—Se considerarán institutos de la enseñanza privada a los fines de este estatuto a toda unidad técnica que, comprendida en el artículo anterior, en plenitud de congregación libremente buscada, esté integrada por: a) educandos; b) maestros o profesores; c) padres de familia, y d) el personal idóneo representativo de la orden, congregación religiosa, asociación laica o del particular.

Art. 3º.—En virtud del artículo anterior y a los efectos de este estatuto y demás disposiciones del régimen escolar en vigencia, el Estado no considerará a los institutos de la enseñanza privada con propósitos comerciales o de lucro, pudiendo establecerles, por lo tanto, los recursos de que dispongan para sus fines y asegurarles, en todos los casos, el cumplimiento de los mismos.

Art. 4º.—En ningún caso el personal directivo y docente de los institutos privados —de conformidad al artículo 2º— podrán ser considerados como empleados o contratados sino con funciones de servicio pedagógico-social, a cuyos efectos cualquier diferencia que se presente en la aplicación de este estatuto o situación jurídica que se planteen, serán resueltas por los organismos que este estatuto crea o, si no, por tribunales ad hoc designados por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 5º.—Quedan también comprendidas en este estatuto las escuelas de enseñanza primaria, de enseñanza familiar, enseñanza domiciliaria, escuelas primarias con cursos de idiomas extranjeros para alumnos mayores de catorce años y las escuelas de enseñanza primaria dependientes de los institutos privados de enseñanza media a que se refiere el artículo 1º, siempre que las mismas funcionen como escuelas de aplicación aunque la enseñanza que impartan esté incorporada o reconocida por los gobiernos de provincia.

Art. 6º.—Los institutos privados a que se hace referencia en los artículos anteriores, pero integrados por distintos organismos docentes o secciones, anexos o dependientes entre sí y que impartan diversos tipos de enseñanza, serán clasificados, a los fines de la aplicación de este estatuto y de su fiscalización, como unidades técnicas independientes.

En cuanto al régimen administrativo y contable, pago de sueldos al personal en la escala que le corresponda y demás obligaciones será considerado el establecimiento, a los fines de toda responsabilidad, como una unidad patrimonial.

B) Clasificación de los institutos

Art. 7º.—A los fines que se establecen en este estatuto, se clasificarán los institutos privados del país, comprendidos en los artículos 1º y 5º, teniendo en cuenta sus distintas zonas, necesidad social de los institutos privados, tipos de enseñanza que impartan y demás aspectos, en: a) pagos y b) gratuitos;

1º Institutos de la enseñanza privada pertenecientes a órdenes y congregaciones religiosas con o sin personería jurídica; con a) alumnos internos, medio pupilos y externos; b) medio pupilos y externos; c) externos únicamente;

2º Institutos laicos de la enseñanza privada pertenecientes a asociaciones, con o sin personalidad jurídica o de propiedad particular con: a) alumnos internos, medio pupilos y externos; b) medio pupilos y externos; c) externos únicamente;

3º Institutos de la enseñanza privada pertenecientes a órdenes, congregaciones religiosas, asociaciones laicas, con personalidad jurídica, que impartan la enseñanza primaria o media (secundaria, normal, comercial, profesional, técnica e industrial) en forma gratuita a la totalidad de los alumnos.

Art. 8º.—Dentro de la clasificación anterior se determinarán los institutos pagos que no se encuentran en condiciones económicas para el cumplimiento de este estatuto. Fijadas sus categorías correspondientes, la importancia y necesidad de esos institutos, se les aplicará las disposiciones de este estatuto que más convengan a sus fines. Los institutos de la enseñanza privada con internado, aludidos en los incisos 1º y 2º del artículo anterior, tendrán, según la zona del país en que funcionen, un tratamiento preferencial como reconocimiento y estímulo a la labor educativa que cumplen.

C) Del concepto de gratuidad

Art. 9º.—Para ser considerado el instituto de la enseñanza privada dentro de la clasificación que determina el inciso 3º del artículo 7º, deberá reunir, como mínimo, a la sanción de este estatuto, las siguientes condiciones:

- Cinco años cumplidos de funcionamiento continuado con validez oficial de sus títulos;
- Una asistencia media de más de 200 alumnos en cada tipo de enseñanza que imparta;
- Que los alumnos de la enseñanza media (secundaria, normal, comercial, profesional, técnica e industrial) no abonen por concepto de inscripción y derecho de examen una suma superior a la que cobra la Nación;
- No percibir en concepto de cuota mensual para la cooperadora una suma superior a un peso moneda nacional y sólo durante los meses del curso escolar;
- Prohibición de percibir suma alguna por cualquier otro concepto, a excepción de los que se exijan para la expedición de los diplomas profesionales.

En cuanto al número de alumnos que fija el inciso b) podrá ser modificado en menos teniendo en

cuenta la población o zona y demás circunstancias económicas y sociales, en donde funcione el instituto privado.

Art. 10. — Los institutos de la enseñanza privada a que se refiere el artículo anterior gozarán de los beneficios, en cuanto al pago del personal directivo, docente, administrativo, obrero, de maestranza y de servicio, que les acuerdan los artículos 14 y 23 y disposiciones pertinentes de este estatuto.

Art. 11. — El instituto de la enseñanza privada clasificado como pago podrá solicitar a la Dirección General de Enseñanza Privada su clasificación como gratuito, a los fines de acogerse a los beneficios de las disposiciones pertinentes. Comprobadas las condiciones del artículo 9º se lo declarará comprendido en los beneficios del artículo 10, pero se le exigirá no menos de tres años, a partir de la autorización respectiva, de enseñanza gratuita.

CAPÍTULO II

A) Sueldos del personal directivo, docente, administrativo y demás personal obrero, de maestranza y de servicio.

Art. 12. — Los institutos de la enseñanza privada abonarán a su personal directivo, docente, administrativo y demás personal el mismo sueldo que perciban los del personal de los establecimientos de la misma categoría y tipo de enseñanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública o del Consejo Nacional de Educación.

Art. 13. — A los fines del artículo anterior se establecerán dichos sueldos teniendo en cuenta las siguientes normas:

- a) Clasificar los institutos privados del país dentro de las categorías establecidas para los establecimientos oficiales;
- b) Determinar la retribución que le corresponda, en virtud de la clasificación anterior, ya sea por cargo directivo, docente, administrativo u otros, por hora, cátedra, sueldo por grado, empleo o cualquier otro sistema que se aplique en los de igual tipo de enseñanza y categoría de establecimientos de la Nación;
- c) Acumular, a la retribución determinada en virtud del inciso anterior, las bonificaciones que les corresponda, computadas en la misma forma que para el personal de los establecimientos oficiales, o cualquier otro beneficio de que pudiera gozar el personal de estos establecimientos.

Art. 14. — Quedan comprendidos en este capítulo y demás disposiciones estatutarias pertinentes, el personal obrero, de maestranza y de servicio siempre que lleve más de tres años a la sanción de este estatuto.

Art. 15. — Determinada la clasificación de los institutos de la enseñanza privada de conformidad al inciso a) del artículo 13 y fijados los aportes que le correspondan al Estado, según los casos, no se autorizará a estos institutos privados, a los fines de este estatuto, salvo por causas debidamente justificadas, un personal administrativo, obrero, de maestranza y de servicio superior a los que tengan, dentro de la categoría correspondiente, los establecimientos de la Nación.

El personal que excediese al establecido será retribuido, con los sueldos que le corresponda, por el instituto privado, únicamente.

B) Escala mínima obligatoria de sueldos

Art. 16. — Si el instituto de la enseñanza privada comprobare la imposibilidad de abonar los sueldos que fija el artículo 12, queda obligado a hacer efectiva una remuneración a su personal, que no podrá ser inferior a la que establece la siguiente escala:

a) Para el personal directivo y docente:

- 1º Como sueldo inicial una retribución no inferior al 50 % del que le corresponda por todo concepto —dentro de las normas del artículo 13— al personal de los establecimientos oficiales;
- 2º Si lleva más de cinco (5) años de servicio en la enseñanza privada tendrá una retribución no inferior al 60 por ciento;
- 3º Con más de diez años, en las mismas condiciones de los incisos anteriores, una retribución no inferior al 70 por ciento;
- 4º Con más de trece años del 75 %; con más de dieciséis años del 80 %, y con más de diecinueve años del 100 por ciento.

b) Para el personal administrativo:

- 1º Como sueldo inicial una retribución no inferior al 50 % si el instituto privado está clasificado en primera o segunda categoría; y del 60 % en las siguientes;
- 2º Cumplidos diez años de servicios continuados en un mismo instituto privado, o que llevase más de quince años de servicios prestados en la enseñanza privada, de cualquier tipo de establecimiento, gozará de un sueldo no inferior al 80 % del que le corresponda por categoría y tipo de establecimiento;
- 3º Estos sueldos serán acumulables a los que perciba como docente en el instituto o en cualquier establecimiento oficial o privado, a los fines de la jubilación.

c) Para el personal obrero, de maestranza y de servicio:

- 1º Como sueldo inicial, una retribución no inferior al 70 % del que goza el de igual categoría y tipo de establecimiento de la Nación;
- 2º Cumplidos diez años en la enseñanza privada el 80 % del que le corresponda, en igual forma que el inciso anterior;
- 3º Después de diecinueve años de servicio en cualquier tipo de establecimiento o trabajo, educacional o no, el 90 % del sueldo que le corresponda de conformidad a la categoría o tipo de establecimiento educacional en que trabaja.

Art. 17. — A los efectos del artículo anterior, el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta para la determinación de los sueldos que por este estatuto le corres-

ponderará al personal obrero, de maestranza y de servicio, los beneficios que pudieran tener, de parte del propio instituto privado, en cuanto a manutención, casa o cualquier otra retribución o compensación de servicios.

Art. 18. — Los sueldos a establecerse para el personal obrero, de maestranza y de servicio, de conformidad a este estatuto, no podrán ser inferiores, en ningún caso, a los que gozaba este personal durante los años de 1946 y 1947.

Art. 19. — La retribución que le corresponda al personal directivo, docente, administrativo, obrero, de maestranza y de servicio no podrá ser disminuída por ningún concepto y será abonada mensualmente y durante los doce meses del año con los mismos beneficios de licencias y vacaciones o aquellos que las leyes o reglamentos les acuerden al personal de los establecimientos educacionales de la Nación.

Art. 20. — El instituto privado que solicite los servicios de su personal docente fuera de la distribución horaria de clases o en período de vacaciones, le abonará como suplemento la misma retribución que le corresponde en virtud de los artículos anteriores. El personal directivo tendrá un período de vacaciones, al finalizar el año lectivo, no inferior a cuarenta y cinco días corridos.

Art. 21. — A los efectos de determinar asignaciones y cómputos de la antigüedad y la escala del artículo 16, fíjense el 1º de enero y el 1º de julio de cada año como fechas de ajuste, en la forma y modo que establezca el Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO III

Aportes y garantías del Estado

Art. 22. — Comprobado por la Dirección General de Enseñanza Privada que el instituto no puede abonar los sueldos que fija este estatuto, el Estado concurrirá con su aporte a integrar la retribución que le corresponda al personal directivo, docente, administrativo, obrero, de maestranza y de servicio, pero su contribución no podrá ser superior a la proporción que a continuación se establece:

1º Para el personal directivo y docente:

- a) Durante los trece primeros años de servicio en la docencia privada, con el 75 % de la retribución que le corresponda percibir;
- b) Con más de trece años, con el 80 %; con más de dieciséis años, con el 85 %, y más de diecinueve años, el 90 por ciento.

2º Para el personal administrativo, obrero, de maestranza y de servicio:

- a) Durante los diez primeros años de servicio, con el 50 % de la retribución que le corresponda de conformidad a la escala correspondiente;
- b) Con más de diez años de servicio, con el 60 por ciento.

Art. 23. — Para el pago del personal directivo, docente, administrativo, obrero, de maestranza y de servicio de los institutos privados que contempla el inciso 3º del artículo 7º y de los artículos 9º y 10, el Estado queda obligado a una retribución no inferior a las que establece el artículo 16.

Art. 24. — El Estado no podrá contribuir con aporte alguno para integrar el sueldo de profesores or-

denados o pertenecientes a congregaciones religiosas que profesen en los institutos de la enseñanza privada, a excepción de los que tengan a su cargo la enseñanza de religión.

Art. 25. — El Poder Ejecutivo o el Congreso podrán acordar a los institutos privados que tengan personal docente religioso superior al 40 % de la totalidad del cuerpo de profesores que se exige para el cumplimiento de los planes de estudios de la Nación, un subsidio estímulo. Para establecer el monto de este subsidio se tendrán en cuenta, además de la importancia y categoría del instituto privado, las demás circunstancias del artículo 29.

Art. 26. — También gozarán de subsidio anual para gastos de sostenimiento y demás servicios pedagógicos sociales los institutos de enseñanza privada comprendidos en el inciso 3º del artículo 7º y en los artículos 9º y 10. El subsidio les será abonado mensualmente y al liquidarle el Estado los aportes que les correspondan.

Art. 27. — El monto del subsidio que se les acuerde a los institutos privados a que hacen referencia los artículos anteriores no podrá exceder, en ningún caso, el 75 % de los gastos de sostenimiento del instituto de la enseñanza privada, estando éste obligado a contribuir con el 25 % restante, por lo menos, de recursos propios.

En ningún caso podrá aplicarse parte de este subsidio para mejorar el pago del personal directivo o docente.

Art. 28. — El Poder Ejecutivo, en todos los casos que le corresponda al Estado concurrir con su aporte y a fijar la determinación de los mismos, clasificación de los institutos privados a estos efectos, o tratamiento especial que se exija, como también para cualquier otra retribución que se le acuerde, tendrá en cuenta los informes y asesoramientos de la Dirección General de Enseñanza Privada.

Art. 29. — A los efectos del artículo anterior se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:

- a) La población escolar e importancia de la localidad;
- b) Distancias con otros medios urbanos que tengan establecimientos oficiales;
- c) Medios de comunicación y transportes;
- d) Tipo de enseñanza que imparte;
- e) Número de alumnos que reciben enseñanza
- f) Aranceles que cobran;
- g) Cualquier otro servicio pedagógicosocial que impartan.

Art. 30. — El Poder Ejecutivo o el Congreso, previo informe correspondiente de la Dirección General de Enseñanza Privada que compruebe el estado de necesidad social del instituto, podrán acordarle la remuneración más conveniente a sus fines, dentro de las escalas o clasificaciones de este estatuto o acordarles las que mejor aseguren su funcionamiento.

Art. 31. — El Estado no se obliga en ningún caso a contribución alguna para los sueldos de profesores a cargo de divisiones que lleven funcionando más de dos años escolares con un número inferior a 25 alumnos en los tres primeros cursos e inferior a 15 en los siguientes. Los sueldos de estos profesores quedan a cargo exclusivo del Instituto de la Enseñanza Privada.

Art. 32. — A los fines determinados en este capítulo III será incluida en el presupuesto general de gastos de la Nación, anexo 7, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, en inciso especial que se denominará «Dirección General de Enseñanza Privada-Contribución del Estado (Ley número...), la nómina de los institutos privados comprendidos en este estatuto, clasificados por categorías, tipos de enseñanza y discriminación del monto de la contribución del Estado.

Art. 33. — El Estado garantizará a los institutos privados la no creación de nuevos establecimientos oficiales, habilitación de divisiones ni autorizará el funcionamiento de nuevos institutos incorporados, en períodos inferiores a tres años a contar de la aplicación de este estatuto, en todas aquellas poblaciones en donde funcionen institutos de la enseñanza privada con reconocimiento oficial de sus estudios.

Art. 34. — Para la creación de nuevos establecimientos oficiales o habilitación de divisiones, como también para acordar nuevas incorporaciones, el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta la población escolar de la localidad o zona; número de alumnos que no pueden ser admitidos, por falta de capacidad, en los establecimientos de la Nación; que la capacidad de los establecimientos privados esté colmada. Quedan excluidas de este artículo las divisiones que, por la promoción de los alumnos del mismo establecimiento, deban ser habilitadas.

Art. 35. — En virtud del artículo anterior la dirección de los establecimientos oficiales elevará a la Dirección General de Enseñanza Privada copia de las nóminas de alumnos que no consiguieron matrícula, y que fuera remitida, a su efectos, a la inspección general de establecimiento oficiales.

Art. 36. — Autorizada por el Poder Ejecutivo la habilitación de nuevas divisiones en los establecimientos oficiales no se admitirán pases de alumnos provenientes de los institutos privados, siempre que éstos estuvieren instalados en la misma localidad del establecimiento de la Nación. La Dirección General de Enseñanza Privada podrá acordar estos pases cuando se invoquen causas debidamente justificadas.

Art. 37. — En ningún caso el Poder Ejecutivo acordará nuevas incorporaciones a institutos que pretendan impartir igual tipo de enseñanza de los que ya stén en funcionamiento. Si la población escolar requiere la instalación de nuevos institutos, se crearán establecimientos de la Nación.

Art. 38. — Creado, no obstante el término que fija el artículo 33, nuevos establecimientos educacionales, en lugares donde funcionan institutos privados e igual tipo de enseñanza del que instale la Nación, el Poder Ejecutivo irá autorizando su funcionamiento en forma graduada, adjudicándose los bancos a aquellos alumnos no matriculados en los institutos privados de la misma localidad.

Art. 39. — Si la instalación del nuevo establecimiento oficial provoca la clausura del instituto privado, dentro de los cinco primeros años del funcionamiento de aquél, el Estado se obliga a abonarle la indemnización. Para fijar el monto de la misma se tendrá en cuenta la indemnización que debe abonarse al personal directivo, docente, administrativo, obrero, de maestranza y de servicio, de conformidad a lo que establece este estatuto y las leyes respectivas. En todo caso se tendrá en cuenta el importe de la Dirección General de Enseñanza Privada.

da. El personal directivo y docente será preferido para las designaciones en el establecimiento oficial.

CAPÍTULO IV

A) Aportes y obligaciones de los institutos

Art. 40. — Para determinar los aportes que de conformidad a este estatuto le corresponde a los institutos de la enseñanza privada se tendrán en cuenta las siguientes normas:

- a) Establecer sus ingresos anuales con las sumas que por cualquier concepto abonen los alumnos internos, medio pupilos y externos de la enseñanza media y con las entradas por cualquier otro título o concepto;
- b) Determinar los egresos considerando los gastos generales, de amortización y reserva, capital e intereses, de conformidad a lo que disponen las leyes de impuesto a los réditos y de ganancias eventuales, como también sus reglamentaciones respectivas.

Para fijar dentro de los gastos de manutención, el costo medio por alumno de la enseñanza media, se tendrán en cuenta, a su vez, los alumnos internos y medio pupilos de la enseñanza primaria si los hubiere.

En cuanto al sueldo que se asigne al propietario-director nunca podrá ser superior al que percibe el personal directivo de igual categoría del establecimiento oficial;

- c) Fijados los ingresos y egresos, la suma que dé como diferencia en más será aplicada al pago de sueldos. Esta suma o la proporción que corresponda será dividida por el número de horas de enseñanza a cargo del personal docente laico. La proporción obtenida nunca podrá ser inferior a lo establecido en el artículo 16 de este estatuto, salvo los casos de excepción que se contemplan en el mismo.

El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de este artículo y su aplicación dentro de la naturaleza y organización de los institutos privados.

Art. 41. — Los institutos privados depositarán, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en el Banco de la Nación Argentina, el importe mensual que les corresponde abonar en concepto de aporte para el pago de personal directivo, docente, administrativo, obrero, de maestranza y de servicio de conformidad a este estatuto, como también lo que corresponda para la jubilación.

Art. 42. — El aporte a pagarse no podrá ser inferior al promedio de los sueldos que abonaba a su personal en el curso escolar de 1946, salvo resolución expresa de la Dirección General de Enseñanza Privada que, a estos efectos, tendrá en cuenta las normas del artículo 13 y correspondientes.

B) De los derechos arancelarios

Art. 43. — Para la fijación de los aranceles que los institutos privados aplicarán a sus alumnos se tendrán en cuenta las siguientes normas:

- 1º Categoría y tipo de establecimiento dentro de la clasificación del artículo 12;

- 2º Localidad o zona en donde funcione;
- 3º Personal directivo y docente designados, teniendo en cuenta los mejores títulos profesionales que se exijan para igual tipo de establecimientos de la Nación y concepto docente de los mismos;
- 4º Gastos generales para su sostenimiento;
- 5º Obligaciones de instalación de gabinetes, laboratorios, talleres, material didáctico, etcétera;
- 6º Costo exigido para el mantenimiento e importancia del local;
- 7º Actividades que realiza el instituto.

Art. 44. — Los institutos privados antes de la iniciación del curso escolar y en la fecha que determine la reglamentación, elevarán a la Dirección General de Enseñanza Privada los tipos de arancel que estimen convenientes. Estos pasarán a estudio de una junta especial, designada todos los años e integrada por cinco miembros, en la forma que establezca el Poder Ejecutivo. En esta junta deberán estar representados los institutos privados religiosos y laicos en igual proporción. Las resoluciones de esta junta serán apelables ante la Dirección General de Enseñanza Privada o del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en los casos que el Poder Ejecutivo lo disponga.

Art. 45. — Los derechos arancelarios que se fijen a la iniciación de cada curso escolar para cada localidad serán uniformes y obligatorios para todos los institutos privados. Estos derechos arancelarios pueden ser modificados en menos, pero siempre que no se disminuya el aporte que de acuerdo al estatuto le hubiere correspondido abonar al instituto privado. Para la fijación de los derechos arancelarios siempre se tendrá en cuenta, por la categoría y tipo de enseñanza del establecimiento, el aporte mínimo que debe abonar el instituto privado en virtud de este estatuto. La Dirección General de Enseñanza Privada podrá autorizar las excepciones que estime convenientes teniendo en cuenta las zonas o estado de necesidad social del instituto.

Art. 46. — Los institutos privados con más de diez años de existencia a la sanción de esta ley que no estén en condiciones económicas de abonar los sueldos que se establecen en este estatuto perderán los beneficios de la validez oficial de sus estudios. A los institutos que no tuvieren la antigüedad expresada se les acordará un plazo que no excederá de tres años para ponerse en las condiciones que exige este estatuto. En caso de clausura, el personal docente cesante será preferido para su designación en los establecimientos oficiales, teniendo en cuenta sus títulos y conceptos docentes.

C) Otras obligaciones

Art. 47. — El Estado tendrá derecho a disponer de asientos en cualquier instituto privado comprendido en este estatuto. Para tales fines los institutos privados quedan sujetos a las siguientes obligaciones:

- 1º Hasta los diez días posteriores a la realización de los exámenes de ingreso, si los hubiere, en los establecimientos oficiales o de la fecha de la clausura de las matrículas, se pondrá a disposición del Estado un número de plazas no superior al 20 % del máximo de alumnos autorizados para cada división según los tipos de enseñanza de cada establecimiento;

- 2º La Dirección General de Enseñanza Privada, dentro del plazo que determina el inciso anterior comunicará a los institutos privados las nóminas de alumnos que deben ser matriculados. Observará, a estos fines, una distribución equitativa entre todos los institutos privados, debiendo preferir a los de enseñanza gratuita.

Los alumnos inscritos en estas condiciones serán preferidos para sus pases respectivos a los establecimientos oficiales. Quedan eximidos de esta obligación los institutos de la enseñanza privada que no reciban aporte alguno del Estado.

Art. 48. — Los institutos pertenecientes a comunidades religiosas que, por resolución expresa de las organizaciones de que dependan, tuvieran con anterioridad derechos arancelarios inferiores a los que puedan fijarse en virtud del artículo 43, podrán mantenerlos en vigencia, aportando la suma que se obtenga de la proporción existente entre el promedio de los que se apliquen y el que se establezca.

CAPÍTULO V

De los nombramientos y pagos de sueldos al personal

Art. 49. — La dirección o autoridad correspondiente del instituto o escuela de la enseñanza privada elevará, en la fecha que se determine, a la Dirección General de Enseñanza Privada, la propuesta del personal directivo y docente de conformidad a lo que establezca el Poder Ejecutivo. También comunicará a los efectos de este estatuto el personal administrativo, obrero de maestranza y de servicio que hubiese sido designado.

Art. 50. — El personal directivo y docente que se proponga deberá tener las mismas condiciones exigidas para los de igual categoría y tipo de enseñanza de los establecimientos de la Nación.

Art. 51. — La Dirección General de Enseñanza Privada, estudiadas las propuestas y previos los informes del caso, ordenará a la repartición administrativa correspondiente se formule las planillas de liquidación de aportes y demás contribuciones o subsidios.

Art. 52. — Los aportes del Estado y las contribuciones acordadas serán abonados mensualmente y en la forma, procedimiento y contralor que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 53. — Las propuestas de personal directivo y docente sólo podrán ser rechazadas por la Dirección General de Enseñanza Privada si aquéllos no estuvieren en las condiciones exigidas por las reglamentaciones en vigencia para los establecimientos oficiales.

Art. 54. — En caso de supresión de cursos o divisiones, previa autorización de la Dirección General de Enseñanza Privada, quedará en disponibilidad el personal docente con menor clasificación en las nóminas de conceptos de profesores, siempre dentro de los cursos o divisiones paralelos, a excepción de los que tuvieren diez o más años de ejercicio en la docencia privada.

Art. 55. — A los efectos del artículo anterior, y para la confección de las nóminas de conceptos docentes, al finalizar el curso escolar y en las fechas que se determinen, la dirección del instituto privado elevará a la Dirección General de Enseñanza Privada el informe de cada profesor. Estos informes, con vistas al interesado, serán clasificados por orden de mérito, por el tribunal calificador que establece este estatuto. Las

resoluciones del tribunal calificador son recurribles ante la Dirección General de Enseñanza Privada y, en último grado, ante el ministerio del ramo.

Art. 56. — Para la adjudicación de nuevas cátedras por habilitación de divisiones, o de aquellas que fueren quedando vacantes por licencia, renuncia, incompatibilidad, fallecimiento del titular o por cualquier otra causa, serán preferidos los profesores del propio instituto privado que fueran declarados en disponibilidad en virtud del artículo 54; de no haberlos, serán preferidos los de mayor antigüedad, siempre que ejercieran materias afines y que sus títulos profesionales y conceptos docentes así lo habilitaran.

Art. 57. — El personal directivo de los institutos privados no podrá acumular un número de horas de enseñanza superior al autorizado para el personal directivo de los establecimientos de igual tipo de enseñanza de la Nación.

Art. 58. — El personal docente podrá acumular hasta cuatro cátedras (24 horas semanales) de clase entre establecimientos oficiales y privados siempre que no tengan más de 16 horas en los colegios de la Nación. En ningún caso el profesor de un colegio oficial podrá profesar en el instituto privado que esté incorporado a aquél.

Art. 59. — Cada tres años, la Dirección General de Enseñanza Privada elevará, antes del 15 de marzo del año subsiguiente, al Poder Ejecutivo, las planillas de nuevas asignaciones para pago de sueldos por el aumento progresivo de los mismos o por haberse autorizado el funcionamiento de nuevos cursos o divisiones.

Los institutos privados no se verán obligados a abonar estos aumentos en tanto el Estado no proceda, si así le corresponde, a hacer efectivos los aportes que le fija este estatuto. Los aumentos serán liquidados, en todo caso, con efecto retroactivo a la fecha que les correspondía.

CAPÍTULO VI

A) De la estabilidad y demás beneficios

Art. 60. — El personal directivo y docente que a la sanción de este estatuto tenga una antigüedad de tres años y sus informes de concepto docente sean favorables quedarán confirmados automáticamente y no podrán ser separados de sus cargos sino en las condiciones y procedimientos que establece este estatuto.

Art. 61. — Los que no tuvieren la antigüedad que determina el artículo anterior podrán ser confirmados en cada caso, teniendo en cuenta para ello el título profesional que posean, concepto docente y demás condiciones. La Dirección General de Enseñanza Privada resolverá las confirmaciones del expresado personal.

Art. 62. — A los efectos del artículo anterior, la remoción del personal se ajustará al siguiente procedimiento y con intervención de la Dirección General de Enseñanza Privada: a) denuncia o acusación por escrito; b) vista de ésta a la Dirección General de Enseñanza Privada, para que ordene el sumario y dé la resolución que corresponda; c) traslado por diez días al profesor denunciado; d) prueba de cargo y descargo por un término no mayor de quince días; e) traslado para la defensa, por un término no inferior a diez días; f) examen del sumario por la Dirección General de Enseñanza Privada por un término

no superior a treinta días; g) resolución de la Dirección General de Enseñanza Privada dentro de los diez días subsiguientes.

Art. 63. — El denunciado notificada que le sea la resolución, podrá interponer dentro de los cinco días el recurso jerárquico correspondiente ante el tribunal que se establece o el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, según se determine. Igual derecho se le acuerda al denunciante. El tribunal o el ministerio, según el caso, deberá expedirse dentro de los 20 días de abogado a la causa.

Art. 64. — Si dentro de los 45 días que la Dirección General de Enseñanza Privada ha tomado conocimiento del sumario para su examen y resolución, o dentro de los 20 días de notificarlo el tribunal o el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a iguales efectos, no se hubiere dictado resolución definitiva, quedará rechazada la denuncia y reincorporado a su cargo, en el caso de haber sido suspendido el denunciado, teniendo derecho a cobrar el sueldo que dejó de percibir durante el tiempo de la suspensión.

B) Del personal directivo y docente

Art. 65. — El personal directivo y docente de los institutos de la enseñanza privada comprendido en las disposiciones de este estatuto, queda acogido en un todo, y reconocidos sus años de servicio, para acogerse a todos los beneficios que las leyes o reglamentaciones, en cuanto a concursos a cátedras o cargos directivos, licencias, vacaciones, etcétera, acuerdan al personal de los establecimientos educacionales de la Nación.

Art. 66. — A los efectos del artículo anterior, se computarán los años de ejercicio en la enseñanza privada, aunque éstos no hubieren sido continuados, que se hubieren prestado en institutos incorporados a establecimientos dependientes, por cualquier título, de gobierno de provincia, o de organismos docentes dependientes de las universidades nacionales, o de aquellos que funcionaren en virtud de decreto ley o ley, siempre que dichos estudios hayan sido, o sean de validez oficial.

Art. 67. — En los institutos privados pertenecientes a congregaciones religiosas, podrán ser substituídos los profesores laicos que a la sanción de este estatuto no tuvieren la antigüedad que determina el artículo 60 por personal religioso que tenga los mismos títulos profesionales que se exige para las asignaturas desempeñadas por aquéllos, siempre que se les abone una indemnización equivalente al 20 % del total de los haberes que hubiere percibido el profesor durante todo el tiempo de los servicios prestados al instituto.

Art. 68. — Se autorizará la substitución del personal laico por personal religioso, aunque aquél se encuentre debidamente confirmado en sus cátedras o cargos, siempre que el profesor laico no lleve en el instituto privado más de cinco años de ejercicio, como titular, en la docencia. La substitución deberá hacerse efectiva observando el orden que corresponda a la menor antigüedad del personal y orden de colocación en las nóminas de conceptos docentes a que hace referencia el artículo 55 y en relación en todos los casos a las asignaturas a cargo de los profesores a reemplazar.

Art. 69. — Hecha efectiva la separación del profesor laico se le abonará una indemnización calculada en base a los haberes totales abonados por el instituto privado con anterioridad a la vigencia de este

estatuto, más el total de lo que le haya correspondido al profesor de acuerdo con la escala respectiva que se establece, teniendo en cuenta el tiempo que prestó servicios con posterioridad a la aplicación del estatuto.

Art. 70. — En virtud del artículo anterior, la indemnización será del 10 % del monto total de los haberes, siempre que no sea inferior a la remuneración de un mes por cada año de servicio prestado. Si el profesor tiene familia a su cargo, el monto de la indemnización no podrá ser inferior al 30 % del total de la suma que le correspondía en ese concepto, siempre que el profesor no desempeñe en otros institutos privados y oficiales, o empleos de otra naturaleza, cargos o cátedras que equivalgan a una remuneración igual o superior a la que gozaba en el cargo que se le reemplaza. En este caso la indemnización no podrá ser inferior al 10 % del total de sus haberes. El Poder Ejecutivo fijará las normas para la aplicación de este artículo.

C) Del personal administrativo

Art. 71. — El Poder Ejecutivo establecerá la clasificación del personal administrativo teniendo en cuenta para ello las mismas disposiciones y criterio que se aplican para la determinación de este personal en los establecimientos oficiales.

Art. 72. — En virtud del artículo anterior, se fijará en cada caso el alcance de la inamovilidad de dicho personal, como también las causas de su remoción y procedimiento de la misma.

Art. 73. — El personal administrativo que a la sanción de este estatuto lleve más de cinco años de servicio en el instituto privado quedará confirmado automáticamente. Sólo podrá ser removido por las causas y procedimiento que se determinen. Los que no tuvieren la antigüedad que se expresa, las autoridades del instituto privado tienen el plazo de un año para resolver la situación de los mismos, transcurrido el cual quedarán confirmados de inmediato.

D) Del personal obrero, de maestranza y de servicio

Art. 74. — Para el personal obrero, de maestranza y de servicio se le aplicarán las disposiciones pertinentes de la ley.

Art. 75. — El personal que a la sanción de esta ley lleve más de diez años de servicio en el propio instituto privado quedará automáticamente confirmado y sólo removible por las causas y procedimientos que determine el Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO VII

De las jubilaciones y pensiones

Art. 76. — Este estatuto declara comprendido en el régimen de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles al personal directivo, docente, administrativo, obrero, de maestranza y de servicio de los institutos de la enseñanza privada, comprendidos en sus disposiciones.

Art. 77. — A los efectos del artículo anterior, el personal hará los aportes correspondientes y obtendrá la jubilación o el retiro en sus distintas situaciones, conforme a lo establecido en la ley respectiva.

El aporte patronal será integrado por el Estado y por el instituto de enseñanza privada en igual

proporción a la determinada por los artículos 12 y 22, para el pago de sueldos del personal. Siempre que el instituto privado no pudiere afrontar su pago total, el Estado se hará cargo del aporte patronal que corresponda a los institutos privados anteriores al presente estatuto.

Art. 78. — Reconócese los años de servicios prestados con anterioridad a la sanción de este estatuto. Con el objeto de abonar la suma que representa el monto del aporte, el Banco de la Nación Argentina le acordará al personal beneficiado la suma total con un plazo de amortización no inferior a cinco años y en las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 79. — El personal directivo, docente, administrativo, obrero, de maestranza y de servicio que llevare más de diez años en la enseñanza privada, el Estado, de rentas generales, hará a la Caja de Jubilaciones los aportes que correspondan.

Art. 80. — En cuanto al aporte patronal que le correspondiera al instituto de la enseñanza privada a que se refiere el inciso 3º del artículo 7º y los concordantes 9º y 10 de estos estatutos, serán hechos por el Estado.

Art. 81. — Los servicios prestados en los institutos privados y en los establecimientos oficiales son acumulables y en caso de jubilación ésta se pagará en la proporción que corresponda, de acuerdo con la ley respectiva.

CAPÍTULO VIII

Tribunal de calificación y disciplina

Art. 82. — Créase el tribunal de calificación y disciplina a los fines que establece el presente estatuto y lo que disponga la reglamentación que se dicte y demás disposiciones escolares.

Art. 83. — El tribunal estará integrado por seis miembros designados en la siguiente forma: dos por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; uno por los institutos religiosos; uno por los institutos laicos; uno por los profesores de institutos religiosos y uno por los profesores de los institutos laicos.

Art. 84. — El tribunal tendrá a su cargo entre las demás atribuciones que le acuerden las reglamentaciones especiales, las siguientes: a) estudiar los informes conceptos del personal directivo y docente y darles la calificación correspondiente; b) entender en toda reclamación que plantee el personal directivo y docente por los conceptos de sus tareas en la enseñanza o directivas; c) resolver cualquier conflicto o reclamación de carácter disciplinario del personal directivo y docente con las autoridades o propietarios de los institutos privados; d) entender, en grado de apelación, de cualquier resolución de la dirección del instituto o de la inspección u organización técnica correspondiente.

Art. 85. — El Poder Ejecutivo establecerá la forma de designación, su constitución, funcionamiento y demás atribuciones que hagan a la competencia de este tribunal.

CAPÍTULO IX

De la Dirección General de Enseñanza Privada

Art. 86. — Créase la Dirección General de Enseñanza Privada, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, a los fines de la aplicación

del presente estatuto y de las demás disposiciones que establezcan las leyes generales de instrucción pública y las disposiciones reglamentarias sobre organización, funcionamiento y fiscalización de los institutos y aranceles comprendidos en esta ley.

Art. 87. — La Dirección General de Enseñanza Privada estará integrada, además del personal y dependencias necesarias para su eficaz funcionamiento, por los organismos técnicos administrativos siguientes:

- 1º Secretaría general;
- 2º Inspección general de enseñanza secundaria, normal y comercial, sobre la base de la actual Subinspección General de Institutos Incorporados, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública;
- 3º Inspección general de enseñanza técnica;
- 4º Inspección general de enseñanza primaria, sobre la base de la actual Inspección General de Escuelas Particulares, dependiente del Consejo Nacional de Educación;
- 5º Inspección médicosanitaria;
- 6º Mesa general de entradas y archivo;
- 7º División de personal, registro general de institutos y estadística;
- 8º División administrativa, contable y de subsidios y asistencia social;
- 9º Asesoría letrada y sumarios;
10. Boletín, biblioteca e informaciones;
11. Oficina de contralor de material de enseñanza y museo escolar;
12. Mayordomía y transportes.

Art. 88. — La Dirección General de Enseñanza Privada, una vez estudiada la situación de los institutos privados, en cuanto a sus antecedentes y reas educativas, solicitará, en cada caso, y debidamente fundada, al ministro de Justicia e Instrucción Pública, que el Poder Ejecutivo acuerde el régimen de instituto autónomo a los establecimientos que por antigüedad, número de alumnos e importancia acreedores a ese beneficio. Estos institutos autónomos seguirán en un todo bajo la inspección y contralor técnicoadministrativo de la Dirección General de Enseñanza Privada.

Art. 89. — Los establecimientos oficiales a los cuales se encuentran adscritos los institutos de enseñanza privada son los agentes naturales de la Dirección General de Enseñanza Privada a los efectos del cumplimiento del presente estatuto y de lo que dispongan las leyes de instrucción pública y demás disposiciones pertinentes.

CAPÍTULO X

Disposiciones transitorias

Art. 90. — El Poder Ejecutivo propondrá, dentro de término de 30 días de la promulgación del presente estatuto, el presupuesto de cargos y gastos para la instalación y funcionamiento de la Dirección General de Enseñanza Privada y de sus dependencias y los fondos necesarios se tomarán de rentas fiscales mientras no se incluyan en la ley general de presupuesto de la Nación.

Art. 91. — El Poder Ejecutivo queda autorizado para incorporar al nuevo organismo y en las respectivas

inspecciones generales que se crean, todo el personal de funcionarios y empleados que presta servicios en las actuales Subinspección General de Institutos Incorporados del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y en la Inspección General de Escuelas Particulares del Consejo Nacional de Educación. También queda autorizado para incorporar a todo el personal de cualquier otra dependencia de su ministerio y del Consejo Nacional de Educación que cumpla tareas específicamente relacionadas con el contralor técnico-administrativo de la enseñanza privada.

Art. 92. — Los fondos de las partidas del personal comprendido en el artículo anterior serán oportunamente transferidos al presupuesto del nuevo organismo, así como los correspondientes a nuevos cargos creados para la Inspección General de Enseñanza y que se encuentren vacantes.

Art. 93. — El Poder Ejecutivo abrirá, a partir del 1º de enero de 1948, una cuenta especial destinada a acreditar los ingresos por matrícula, derechos de examen, certificados y demás actuaciones correspondientes a los alumnos de institutos de la enseñanza privada, a fin de que se destinen en su oportunidad, juntamente con los demás recursos que se originen para el cumplimiento de esta ley.

Art. 94. — Los subsidios de que actualmente gozan los institutos de la enseñanza privada serán mantenidos hasta que dentro del régimen que establece este estatuto, sean incluidos en el presupuesto de la Nación.

Art. 95. — A los efectos de una mejor organización de los institutos privados, de conformidad a la presente ley, la Dirección General de Enseñanza Privada no acordará nuevas incorporaciones durante dos períodos escolares a partir de la sanción de este estatuto.

Art. 96. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 97. — Comuníquese, etc.

Antonio Sobral. — Oscar López Serrot.

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — A partir de la promulgación de la presente ley, el personal directivo y docente de los establecimientos educativos laicos incorporados, autorizados o asimilados a la enseñanza oficial, y, en su caso, los docentes laicos de los establecimientos religiosos, percibirán los mismos sueldos que los asignados al personal del Estado, quedando comprendidos en el régimen administrativo establecido para estos últimos e incluidos en las leyes que los amparan, reconociéndose los años de servicio prestados a los efectos del régimen de retiro y promociones, previo pago del aporte correspondiente a la respectiva caja.

Art. 2º — El Estado abonará los haberes del personal directivo y docente laico no propietario de establecimiento. El personal administrativo gozará de los mismos sueldos establecidos o que se establezcan para aquellos que desempeñen iguales cargos en la enseñanza oficial, debiendo ser abonados por cada establecimiento incorporado, autorizado o asimilado

Art. 3º — Los establecimientos educativos laicos y religiosos incorporados, autorizados o asimilados, ingresarán anualmente al Estado un porcentaje sobre las entradas brutas que por concepto de enseñanza perciban: el 20 % los que funcionen sin internado y el 35 % aquellos que lo posean.

Art. 4º — A partir de la sanción de esta ley, los establecimientos incorporados, autorizados o asimilados, estarán obligados a reintegrar al Estado el importe correspondiente a los sueldos que en la actualidad abonen a sus docentes laicos, cargos que en lo sucesivo serán atendidos con recursos oficiales.

Art. 5º — El personal directivo y docente que a la fecha de la promulgación de la presente ley tenga como mínimo un año de antigüedad en sus funciones, se considerará apto para ser confirmado en los mismos. En lo sucesivo, será designado por el Poder Ejecutivo, excepto los docentes laicos pertenecientes a entidades religiosas, que serán también designados por el Poder Ejecutivo de una terna elevada por la dirección de cada establecimiento.

Art. 6º — Las subvenciones acordadas hasta la fecha a los establecimientos laicos incorporados, autorizados o asimilados a la enseñanza oficial, serán destinadas al cumplimiento de la presente ley.

Art. 7º — El Poder Ejecutivo queda autorizado para aumentar en forma proporcional los derechos de matrícula y examen de los alumnos de los establecimientos oficiales, incorporados, autorizados o asimilados, sean ellos regulares o libres, para reforzar el fondo a que se refiere el artículo anterior; asimismo, podrá el Poder Ejecutivo establecer la obligatoriedad del uso de una estampilla de 10, 20 y 50 centavos, para la venta de toda publicación cuyo precio sobrepase la cantidad de un peso moneda nacional, para con su producido contribuir al fondo de esta ley.

Art. 8º — Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se harán de rentas generales, imputándose a la misma.

Art. 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José Luis Moreno. — Teodoro S. Saravia.

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Saravia. — Señor presidente: creo sinceramente que es altamente honroso para esta Honorable Cámara el tratamiento que vamos a realizar sobre uno de los asuntos más interesantes que tiene el problema de la enseñanza en nuestro país; ya que el mismo, por su importancia y la enorme cantidad de voluntades que suma, fué esquivado siempre por los poderes públicos, que en esa forma dilataron la solución que hoy ha creído encontrar el gobierno y que apoyamos nosotros.

En efecto; cuando el Poder Ejecutivo de la Nación envió su mensaje al Honorable Senado acompañándolo con el articulado del estatuto del docente de los establecimientos particulares, se tuvo cabal sensación del nuevo ritmo que adquiría la enseñanza en el país y se produjo un movimiento muy grande de opinión favorable a la iniciativa tan justa y tan necesaria.

Este problema era uno de aquellos de la enseñanza que tantos estudios demandó en su

oportunidad, problema que comprendía a un amplio sector del magisterio de la República, cuyas condiciones de trabajo son angustiosas, tanto o más que las de los más modestos obreros, con la agravante de que aquéllos tenían y tienen en sus manos la preparación de casi un centenar de millares de alumnos y la desagradable posición de estar librados al arbitrio de la suerte siempre esquivada y de la explotación —¿por qué no decirlo?— de muchos dueños de establecimientos incorporados.

Junto al esfuerzo oficial, la enseñanza privada cumplía su cometido en el país, proliferando en cientos de institutos —637 en total— incorporados a los diversos tipos de enseñanza media, en los que se educan entre varones y mujeres un total de más de 50.000 alumnos de ambos sexos, y trabajan 8.198 profesores.

Los datos que al respecto tengo en mi carpeta y los que en su informe da al Honorable Senado el señor senador Soler prueban elocuentemente la imperiosa necesidad que se tenía de jerarquizar al educador —célula fundamental de la escuela— en esta clase de establecimientos, dándole una serie de beneficios que se señalan en el artículo 7º del proyecto de ley, comprendiendo además al personal directivo, administrativo, de maestranza y de servicio, como ser: primero, estabilidad, siempre que no estuviere en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, con las excepciones que se determinan en el artículo 13 de la presente ley; segundo, sueldo y salario mínimo; tercero, bonificación por antigüedad; cuarto, inamovilidad en la localidad, salvo conformidad escrita del interesado.

La Honorable Cámara conoce y tiene al respecto una opinión formada sobre la desventajosa situación de los docentes particulares que, con iguales títulos, igual capacidad —mayor en muchos casos— e iguales obligaciones, se hallan en evidente desproporción e inferioridad con respecto a los sueldos que perciben los profesores y maestros de los establecimientos oficiales.

La justicia social no había llegado a ellos.

No está en mi ánimo hacer una exposición detallada de este problema, pese a los abundantes antecedentes de que dispongo, porque ilustrar a los señores diputados acerca de una injusticia tan evidente sería repetir una vez más la amarga verdad de hace muchos años.

Al respecto, el diputado que habla tiene formada hace tiempo su opinión sobre este problema y sólo anhela, como legislador y como maestro, verlo solucionado equitativamente, como corresponde a esta hora de legítimos intereses nacionales.

El estatuto del docente que hoy tratamos debe ser aprobado sin dilaciones para organizar la enseñanza privada en un marco de dignificación para el magisterio, que en este sector

importante de la docencia presta señalados beneficios a la cultura pública.

Tal vez en algunos puntos de este proyecto de ley algunos señores diputados no tengan unidad de criterio, porque, en sinceridad, el asunto, tan amplio, no lo sería si no hubiera disparidad de opiniones en algunos detalles; detalles que hemos procurado salvar con insignificantes modificaciones que no hacen al fondo ni al espíritu de la sanción del Honorable Senado.

Las modificaciones introducidas a la sanción de referencia son pequeñas, repito, pero voy a señalarlas rápidamente para conocimiento de la Honorable Cámara.

Al final del inciso a) del artículo 2º se hace el siguiente agregado: «tanto de validez nacional de sus títulos, como de régimen autónomo».

El artículo 15 es substituído por el siguiente: «Las sanciones y remociones decretadas por razones técnicas o de inconducta por el organismo oficial pertinente no darán lugar a ninguna indemnización.»

El artículo 25 es substituído por el siguiente: «A partir del 1º de enero de 1948, no se acordarán nuevas subvenciones, ni se pagarán en lo sucesivo las que hayan sido acordadas en concepto de sueldos para la enseñanza que impartan, a colegios o instituciones de enseñanza privada incluídos en el inciso a) del artículo 2º. Los importes correspondientes ingresarán en la cuenta especial que se habilitará para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.»

Deseo también hacer resaltar a los señores diputados algo que, aunque es notorio, debe constar que se ha dicho en este recinto como una demostración de la situación injusta en la que se hallan los docentes de escuelas particulares comparándolos con los de establecimientos oficiales.

Mientras los profesores de colegios oficiales perciben 12,50 por hora semanal, en la enseñanza privada se abonan entre 0,80 y 2,50, término medio, por hora semanal de clase dictada, no haciéndose efectivos los días feriados ni las inasistencias.

Por lo que respecta a los maestros primarios, los que ejercen en escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación ingresan en la carrera con un sueldo inicial de 275 pesos, que puede llegar por antigüedad hasta 400 pesos, mientras que en los institutos particulares perciben sueldos que oscilan entre los 75 pesos y los 150 pesos mensuales, sin posibilidades de aumento.

Además, los docentes dependientes de la enseñanza oficial perciben sus haberes durante doce meses y un mes de aguinaldo; en cambio, los particulares sólo alcanzan a cobrar ocho meses durante el año. Para ellos no hay año completo, no hay aguinaldo, no hay vacaciones pagadas, no hay sueldo justo.

Con este proyecto de ley que estamos tratando

se solucionan esas injusticias en la mayor parte que se ha podido contemplar; así el profesor y el maestro recibirán un 60 por ciento del sueldo que perciben los docentes oficiales, durante todo el año, además del sueldo anual complementario y de la bonificación por antigüedad.

Para intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato de empleo privado en la enseñanza y de la aplicación de la presente ley, así como para resolver las cuestiones relativas al sueldo, estabilidad, inamovilidad y condiciones de trabajo del personal, que no estén consideradas en este estatuto, se crea el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada, cuya competencia decidirá de la buena marcha que se anhela imprimir a este aspecto de la educación.

De acuerdo con la tendencia que el movimiento revolucionario de junio y el Poder Ejecutivo han impreso a esta obra de justicia social, las comisiones paritarias tienen enorme importancia. La creación propiciada en el proyecto del Poder Ejecutivo, del Consejo Gremial para la enseñanza privada, ha de satisfacer ampliamente a las representaciones gremiales y es de desear que los representantes del personal que vayan a ese consejo sean auténticos representantes en ejercicio de la docencia en colegios particulares, que conozcan sus problemas, que los sientan y los vivan.

El proyecto de ley en su totalidad es claro y llena las aspiraciones de la hora que el gremio docente anhela alcanzar; por eso, en reconocimiento al esfuerzo continuo, a la orientación argentinista, a la justicia, al bien público, en el cual estuvieron siempre presentes los docentes particulares, solicito en nombre de los más profundos sentimientos de solidaridad, aprueben los señores diputados el proyecto de ley en discusión. Se llenará de luz la sombra de Sarmiento y será un día más de regocijo para la patria. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sobral. — Este estatuto, señor presidente, de ser sancionado, como se espera, en la mañana de hoy, nos obliga a considerar más adelante, por estar estrechamente vinculado a él, la ley de libertad de enseñanza. No podemos sancionar un estatuto del personal docente de los colegios privados si previamente no tratamos el aspecto fundamental, es decir, si no resolvemos el problema que hace a la libertad de enseñanza.

No voy a abundar en consideraciones sobre este aspecto, por cuanto el espíritu de todos ya está hecho a la convicción de que a pesar de respetar la libertad de enseñanza, debemos darle su ley adecuada y también la correspondiente organización.

Este estatuto viene a resolver un viejo problema; pero, desgraciadamente, no da la solución que era de esperar. Así, entramos en este debate

sin tener un censo ni un empadronamiento de los colegios de enseñanza privada, ni tampoco del personal docente que ellos ocupan.

Con el señor diputado López Serrot, hemos presentado en su oportunidad un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que se ordenara a la Subinspección General de Enseñanza Incorporada, que en el término de 60 días confeccionara el empadronamiento de los establecimientos de enseñanza privada y del personal docente, para tener una idea clara y exacta en cuanto a su número, que permitiría establecer a cuánto ascendería la inversión a cargo del Estado para contribuir a la atención de este estatuto. Al no ser considerado dicho proyecto, nos hemos visto privados de la posibilidad de tratar un problema fundamental relacionado con el estatuto, cual es el de la jubilación de los docentes de los colegios privados, es decir, conocer y resolver el aspecto económico.

Cuando presentamos el proyecto de ley que hemos firmado con el señor diputado López Serrot, contemplamos la totalidad de las modalidades y situaciones que presenta este complejo problema, relacionadas con la retribución que se debe abonar al personal docente de las escuelas privadas, como así también su estabilidad y jubilación, y en especial la creación del organismo que pondría en marcha este estatuto, o sea la dirección general de la enseñanza privada.

El estatuto que estamos considerando omite esos aspectos fundamentales y no prevé la situación en que se colocan esos colegios frente a los establecimientos oficiales, fijándose un régimen de remuneraciones que no es el más equitativo y justo para los docentes de los colegios privados.

Sin embargo, en homenaje a ese personal docente que debe tener de inmediato un estatuto que regule su retribución, hemos desistido de plantear esas observaciones, para que él pueda ser una realidad en el corriente año.

La Comisión de Presupuesto —de la que formo parte— y la Comisión de Instrucción Pública, especializada, no han introducido ninguna modificación al proyecto de ley en revisión, concretándose a entregar única y exclusivamente la incorporación al estatuto de establecimientos de enseñanza que por una imprevisión habían sido excluidos del mismo. Son los colegios llamados de régimen autónomo o de validez oficial de sus títulos, que son varios en el país, y los que en lo sucesivo se pudieran crear. Son tres grandes colegios, por lo menos, en cuanto a la enseñanza secundaria, y más de una veintena en cuanto a la enseñanza primaria. A eso nos hemos concretado, señor presidente, fundados en el principio de la universalidad de la ley, es decir, que debe obligar a todos los establecimientos privados del país.

Reservamos para la oportunidad correspondiente la modificación del estatuto que se ha de aprobar por esta ley, a fin de asegurar a los

docentes de establecimientos particulares lo que este estatuto no les asegura todavía: su jubilación, su estabilidad y la organización de la dirección general de enseñanza privada, como así también lo atinente a las relaciones de los establecimientos de enseñanza privada con los colegios oficiales.

Dejo así aclarada la opinión del grupo parlamentario a que pertenezco y aunque estimamos fundamentales las observaciones que he puntualizado, diferimos el planteamiento de las mismas, a fin de que sea una realidad el viejo reclamo y el angustioso anhelo de los profesores de establecimientos particulares, por lo cual hemos de votar favorablemente el despacho de las comisiones de Instrucción Pública y de Presupuesto y Hacienda.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — Los señores diputados Saravia y Sobral han expuesto ya, con precisión, las razones que deciden a esta Honorable Cámara a afrontar la consideración de este importante asunto, que preocupa a tantos millares de educadores.

El señor diputado Sobral ha expresado que hemos presentado en conjunto un proyecto de resolución. También aparece publicado, como antecedente, en el orden del día 487, que se considera, un proyecto de estatuto para los docentes particulares.

Además, el diputado que habla presentó en la sesión del 7 de mayo del corriente año un proyecto de resolución, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo respecto al funcionamiento de los colegios particulares y a la situación por que atraviesan los maestros y profesores que en los mismos se desempeñan.

Desgraciadamente, lo pesado del mecanismo en materia de tratamiento de proyectos de resolución, ha hecho que uno que presentara siete días después de iniciado el presente período parlamentario, recabando informes al Poder Ejecutivo sobre este asunto, no haya alcanzado a ser considerado hasta la fecha, cuando ya finaliza el período de sesiones ordinarias. El proyecto de referencia aun sigue figurando en el boletín de proyectos de resolución y de declaración, sin que, repito, a pesar de haber sido presentado el 7 de mayo, el diputado que habla haya podido fundarlo.

Comparto las preocupaciones de los señores diputados que acaban de hacer uso de la palabra; las del señor diputado Saravia, que con prolijidad ha planteado este problema, aunque, advierto, no participo de los argumentos del mismo en cuanto a la influencia de cierta política en la solución de este problema. Adhiero también, íntegramente, a las preocupaciones de re-

formas para el futuro, manifestadas por el señor diputado Sobral.

Cuando con este último señor diputado trabajamos en la elaboración del proyecto de ley que figura en el orden del día que está en consideración, enfocamos los distintos aspectos que presenta el funcionamiento de la enseñanza privada, y es así que resolvimos, a nuestro modo, creyendo haber presentado a la Cámara soluciones interesantes, la situación del personal directivo, docente, administrativo, obrero y de maestranza.

El Senado de la Nación nos ha remitido una sanción que resulta deficiente y cuya aplicación, seguramente, ha de ir destacando aún mayores deficiencias que las que ya han sido apuntadas en el transcurso de este debate.

Deseo agregar a lo ya expresado, que habrá que revisar oportunamente el sistema de clasificación de los establecimientos que se prevé en el artículo 2º; habrá que considerar el sistema de aprobación de los nombramientos efectuados por los colegios particulares, por parte de los organismos oficiales, tal como se establece en el artículo 9º; habrá que analizar los motivos que autorizan la remoción de los docentes y de que habla el artículo 13; y que revisar el criterio de que las remociones decretadas por organismos oficiales no darán lugar a ninguna indemnización —tal como se establece en el artículo 15—, que la comisión proyecta reformar en el despacho que tratamos.

Habrà que modificar la escala de sueldos para el personal docente prevista en el artículo 18 de este despacho, que alcanza al 60 por ciento del que perciben, por idénticas funciones, los maestros y profesores dependientes de la enseñanza oficial, porque habrá que llegar a establecer la equiparación de sueldos, haciendo que los profesores de la enseñanza privada perciban idéntica remuneración que los de la enseñanza oficial. Sobre este aspecto quiero destacar que, con el régimen que proyecta esta comisión, con el régimen aceptado por el Senado en el artículo 18 de la sanción que en estos momentos se considera, maestros y maestras de grado, aun desempeñándose en doble turno, como es común en la enseñanza privada, percibirán una remuneración sensiblemente inferior a la que perciben en la enseñanza oficial las maestras y maestros que se desempeñan en un solo turno.

Habrà que modificar el tratamiento que este despacho da en el artículo 18, inciso b), al personal directivo, docente, auxiliar administrativo, de maestranza y de servicio, por cuanto el aumento del 25 por ciento de lo percibido en los últimos dos años es insignificante si se considera lo reducido de las remuneraciones que hasta este momento han venido percibiendo tales empleados y la enorme incidencia de los

gastos diarios y del costo de la vida sobre sus presupuestos familiares.

Habrà que dejar librado al consejo gremial de enseñanza privada la fijación de los sueldos, pero dando a dicho consejo gremial elasticidad y facultades suficientes como para llegar —repito— a establecer que los docentes de las escuelas particulares puedan percibir hasta el ciento por ciento con relación a los sueldos que por idénticas funciones percibe el personal de maestros y profesores de la enseñanza oficial.

Tengo la seguridad de que todos los señores diputados albergan la convicción de que esta sanción del Senado, aun con las escasas modificaciones que proyectan las comisiones respectivas, constituirá una sanción imperfecta, pero los hechos que han demorado el enfoque y consideración de este despacho por la Cámara, hace que nos encontremos ya casi en el final del período ordinario.

Las tres modificaciones que proponen las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Instrucción Pública —en mi opinión y salvando sobre todo la de mi compañero de sector, diputado Sobral— son quizá las que menos pueden preocupar a los docentes particulares. He enumerado, al pasar, una serie de aspectos contemplados en los distintos artículos que he citado, que merecen una redacción y un enfoque distintos a los que sobre tales aspectos aceptó el Senado, y que aceptan las comisiones que han presentado el orden del día que consideramos. Vale decir, que cualquier modificación de esta Cámara, pequeña o grande, retardará sin beneficio alguno la sanción del estatuto de los docentes particulares, que es reclamado por una legión de mujeres y de hombres que han dado sus años a la enseñanza privada y que en el momento actual, como en ninguna otra oportunidad, por la repercusión que tiene en sus modestos presupuestos familiares el alto costo de la vida, se encuentran abocados al problema que ello plantea en su economía particular y familiar originándoles una situación realmente insostenible.

Es por ello que, en mi condición de autor de un proyecto sobre esta materia, dejo lanzada la iniciativa para que los señores diputados que en el próximo período integren esta Cámara confeccionen un estatuto definitivo, a efectos de perfeccionar el instrumento legal que la Cámara desea entregar para solucionar la situación de tantos millares de trabajadores de la enseñanza privada. Repito que dejo lanzada esa iniciativa como un antecedente para que la aprecien los que entren a resolver con profundidad este gran problema de los docentes particulares. Pero, hoy, debemos hacer cualquier sacrificio y olvidarnos hasta de la pequeña o gran vanidad que pueda asistarnos como auto-

res de iniciativas que hemos presentado sobre este asunto, para recordarnos, en primer término, de la difícilísima situación por que atraviesa el gran número de trabajadores de las escuelas particulares, llevándoles auxilio in período ordinario de sesiones.

Vuelvo a decir que cualquier modificación que en este momento se introduzca hará que nuestra sanción vaya al Senado, y allí corra el albur de estos nerviosos días del final del período ordinario de sesiones.

Por tales motivos, señor presidente, voy a solicitar de los señores miembros de la comisión que, con autorización de la Cámara, se sirvan retirar este despacho y que aprobemos sin modificación alguna la sanción del Senado, para que hoy mismo los docentes particulares cuenten con su estatuto y esta noche...

Sr. Graña Etcheverry. — Si me permite, señor diputado...

Quiero agradecer al señor diputado por la Capital el pedido que en estos momentos formula a la Cámara, pero también debo aclarar que juntamente con el señor diputado Colom y con autorización del presidente de nuestro bloque, íbamos a solicitar de inmediato que se retiraran todas las modificaciones, con el objeto de votar la sanción que viene del Senado, para que hoy mismo los docentes particulares tengan la ley que desde hace tanto tiempo vienen reclamando.

Sr. López Serrot. — Prosigo, señor presidente.

No incorporemos modificaciones, decía, con el fin de que esta noche en la cena familiar —y esto no es para impresionar a la Cámara—, todos los docentes particulares que viven con una insignificante remuneración —siendo muchos de ellos padres de familia o madres a cargo de sus hijos—, puedan tener la convicción de que el presupuesto familiar se ha mejorado sensiblemente para afrontar las futuras necesidades del hogar.

Si no fueran suficientes las manifestaciones que he vertido en el sentido de que se trata de un viejo asunto que hoy debe tener sanción definitiva, me remito a las distintas iniciativas parlamentarias y a la gestión infatigable, persistente, de determinados grupos de trabajadores de la enseñanza privada que, agremiados o no, integrando o no comisiones, han bregado insistentemente ante este Congreso, durante mucho tiempo, por obtener un instrumento legal que remediara su afligente situación.

Si no bastaran esos argumentos, para dejar establecida la necesidad de abandonar todo propósito de reforma, que nunca será completa, que nunca hará perfecta la sanción que vamos a dar dentro de unos instantes, sin ánimo de impresionar a los señores diputados, quiero decirles que es indispensable no colocar una sola piedra, grande o pequeña, en el camino que

tiene asignado este despacho, para llegar a la ansiada sanción definitiva.

Los docentes particulares, entregando a la enseñanza todo su día, trabajando en los turnos de mañana y tarde, dedicados a educar numerosos niños, muchas veces no alcanzan a percibir anualmente más de 500 pesos, ya que sólo se les paga 60 ó 70 pesos mensuales durante los 8 ó 9 meses que dura su desempeño, que son los únicos que se les retribuye. Vale decir que no debemos entorpecer una sanción...

Sr. Rodríguez (N. M.). — Estamos convencidos. Vamos a votar.

Sr. López Serrot. — Lamento, y le pido disculpas al señor diputado, que lo molesten mis palabras, pero si el señor diputado hiciera una exposición sobre esta materia, yo no lo molestaría.

Sr. Díaz. — El señor diputado ha dicho que está convencido y que quiere votar.

Sr. López Serrot. — Deseo agregar una consideración más, con la que ya había puesto término a mi exposición, de no haber mediado esta interrupción. Estos docentes particulares deben gravitar sobre nuestro espíritu a fin de que cada uno de ellos pueda llevar a sus domicilios, durante todo el año, una suma mayor que la que normalmente perciben, que sólo alcanza, repito, a la quinta parte de lo que cada diputado nacional percibe mensualmente en concepto de dieta.

Menciono estas cifras para ilustración de la Honorable Cámara y a fin de que ésta tenga la sensación de la gravedad de la situación económica por que atraviesan los hogares de estos educadores, a la cual debemos poner término en forma inmediata aprobando la sanción del Senado, sin modificaciones, para no demorar la sanción del estatuto.

Sr. Sobral. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sobral. — Quiero formular una breve aclaración respecto a la indicación formulada por los señores diputados López Serrot y Graña Etcheverry, relacionada con la necesidad de sancionar el estatuto en la forma que ha venido aprobado por el Honorable Senado.

Cuando los miembros de la Comisión de Presupuesto nos reunimos con los de la Comisión de Instrucción Pública, resolvimos no hacer objeción fundamental para lograr que el estatuto fuera de carácter universal, como debe serlo toda norma legal. Si nosotros lo sancionamos tal como ha venido en revisión del Honorable Senado habremos excluido algunos colegios que vendrían a beneficiarse al no cumplirlo. El colegio de La Inmaculada, de Santa Fe; el colegio El Salvador, de Buenos Aires, y el colegio Diego Barbé, de Buenos Aires, son institutos de

régimen autónomo, que no admiten inspección ni fiscalización alguna por parte del Estado. Ellos gozan de una autonomía de tal naturaleza que no les alcanzarían las disposiciones de este proyecto de estatuto, que se refiere a los colegios incorporados; y ellos no lo son dentro de ese concepto de total autonomía.

Sr. Graña Etcheverry. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Sobral. — Sí, señor diputado.

Sr. Graña Etcheverry. — De acuerdo con lo que manifiesta el señor diputado, por unos pocos casos particulares tendremos que dejar de lado el interés general. Considero que sería oportuno que sancionemos sin modificaciones el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, a fin de contemplar los casos generales; y podríamos tratar las modificaciones el año próximo, tal como lo anuncia el señor diputado.

Sr. Sobral. — Advierto que estamos en presencia —no me refiero a los señores diputados— de personas interesadas en que esos dos grandes colegios, La Inmaculada y El Salvador, sean excluidos del estatuto, porque, además de obligar a abonar mayores sueldos a los profesores de esos establecimientos, autorizaría al Poder Ejecutivo para controlarlos e inspeccionarlos, cosa que actualmente no puede hacerse.

Por otra parte, existen escuelas particulares de enseñanza privada, como el Patronato de la Infancia, el Coronel Fraga, el Instituto San José, los asilos de menores de la Sagrada Familia, la Conservación de la Fe y el de Orientación de Inválidos, entre otros, que suman 610 cargos y que tienen un tratamiento un poco mixto en el presupuesto; no son institutos oficiales, pero sus sueldos los abona el Estado y siguen, a pesar de ello, como colegios privados. Este estatuto vendría a legalizar su situación, colocando dentro de su ordenamiento legal a todos sus profesores. Con esto quiero decir que estamos en presencia de un estatuto que excluye a 3 grandes colegios eximiéndolos de la obligación de pagar el sueldo al personal docente y de que ellos sean controlados por el Estado. Además, excluiríamos una serie de establecimientos, como los ya citados, cuyo personal no sería beneficiado por sus disposiciones.

Estas son las únicas razones que hemos tenido en cuenta para proyectar la incorporación en el estatuto de esos tres grandes establecimientos educacionales y demás institutos que he mencionado. Considero, por la naturaleza de la modificación, por la justicia que ella representa, porque la ley debe ser pareja para todos, que el Honorable Senado no tendrá ningún inconveniente en dejarlo convertido en ley esta misma tarde, incorporando al régimen de la ley todos los establecimientos de enseñanza privada...

Sr. Graña Etcheverry. — El Senado ya tiene su plan de labor.

Sr. Sobral. — ...para que todos los docentes gocen de los mismos beneficios y para que en todos los institutos rijan las mismas exigencias.

Estas son las razones por las cuales pido se mantenga el despacho de las comisiones de Instrucción Pública y de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — Señor presidente: hubiera deseado disponer del tiempo necesario para informar debidamente este despacho, pero me hago cargo de la forma en que está trabajando esta Cámara; por lo tanto, voy a omitir la referencia a una enorme cantidad de elementos de juicio que había reunido a este efecto.

Este es un asunto que, como muy bien ha dicho el señor diputado por Córdoba, es de gran trascendencia.

La mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda había aceptado que se introdujeran algunas modificaciones al proyecto venido en revisión, en el deseo de hacer un estatuto lo más perfecto posible. Se redactó el despacho tal como aparece en el orden del día, en la creencia de que se iba a disponer del tiempo necesario para que pasara nuevamente al Senado, a fin de que éste se pronunciara. Pero, frente a la actual situación de hecho, el bloque de la mayoría, contemplando esta circunstancia que ha sido apuntada por varios señores diputados, prefiere que hoy, antes de levantarse esta sesión especial, sea sancionado el estatuto del docente particular, tan largamente solicitado por este gremio que no tiene ningún amparo. Es realmente alarmante que el maestro particular esté absolutamente desamparado: no tiene estatuto, no tiene vacaciones pagas y, me animaría a decir, no tiene horario para trabajar.

Porque tres o cuatro establecimientos no queden incorporados al estatuto o porque seiscientos cargos no sean comprendidos dentro del mismo, no debemos entorpecer la sanción de este proyecto, que ahora podemos convertir en ley.

Preguntaría al señor diputado por Córdoba si él y sus colegas de sector saben que han de gozar de los beneficios del estatuto cerca de ocho mil docentes. Entonces, hagamos lo más y dejemos lo menos para más adelante. Pues esta Cámara, oportunamente, podrá modificar y aun perfeccionar este estatuto.

Sancionemos este proyecto y habremos de beneficiar a un enorme grupo de educadores de nuestros niños, que tanto necesitan en esta hora que les llegue la justicia social.

Aunque sé que están anotados otros señores diputados, que merecen una alta consideración, que tienen un caudal enorme de antecedentes para abonar la sanción de esta ley, propongo que se dé por cerrado el debate y entremo a votar

directamente la sanción del Honorable Senado, sin aceptar las modificaciones, de acuerdo a la moción que se ha formulado.

Sr. Sammartino. — No es posible aceptar ese temperamento, porque pondríamos en manos del Poder Ejecutivo la designación de los profesores de los institutos particulares, de manera que serían nombrados profesores oficialistas exclusivamente. Hay un artículo 9º que es gravísimo, y que debe ser reformado.

Sr. Fernández (H. S.). — No me inspira otro propósito que el bien de los docentes particulares.

Sr. Dellepiane. — Como con la moción de cerrar el debate no puedo hacer uso de la palabra, quiero dejar constancia de que apoyo las modificaciones hechas por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Instrucción Pública.

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Se va a llamar para votar la moción de orden.

—Se llama para formar quórum.

Sr. Fernández (H. S.). — Señor presidente: al formular la moción de orden y pedir que se votara la sanción del Honorable Senado, me ha guiado exclusivamente el propósito de beneficiar a 8.000 docentes.

Frente a la situación de que se deja a la Cámara sin número para no votar el cierre del debate, retiro mi moción; veremos a fin de mes si esos 8.000 docentes cuentan con su ley.

Sr. Dellepiane. — Dependerá del Senado.

Sr. Ravignani. — ¿Quiénes dejan a la Cámara sin número?

Sr. Fernández (H. S.). — No hago cargos a nadie.

Sr. Sammartino. — Si el Senado patricio no cumple con su deber, no habrá ley.

Sr. Dellepiane. — El artículo 9º que ha sancionado el Senado da facultades discrecionales al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Liceaga. — En mi carácter de autor del primer proyecto presentado en el actual período parlamentario sobre estatuto del profesorado secundario y del magisterio, en el que también se encara el asunto en discusión, deseo expresar mi opinión y con verdadera simpatía participo en este debate del estatuto de los maestros de establecimientos particulares, para refirmar mi voto favorable, convencido de que es una necesidad impostergable, de la que me he ocupado con todo interés en las distintas oportunidades en que se ha planteado el problema docente.

Recordaré a la Honorable Cámara que el 5 de julio del año próximo pasado presenté el proyecto de estatuto de los docentes de establecimientos oficiales; el 29 de noviembre hice indicación de que se tratase el estatuto docente

primario y secundario; y el 11 de diciembre, al considerarse la situación del personal de enseñanza media, requerí la urgente consideración de los problemas relacionados con la enseñanza primaria.

Fué en aquella oportunidad que destacados miembros del sector mayoritario formularon su promesa de darle solución en las primeras sesiones del presente período y llegamos al final sin que los maestros tengan estatuto. La Honorable Cámara y el país continúan en deuda con un gremio que hace honor a la patria, que realiza un obra meritoria y de sacrificio, una obra de cultura que nos enaltece. No es posible que los maestros sigan siendo los parias, el único gremio que no ha recibido, no diré beneficios, sino ni siquiera lo que le corresponde. Sus sueldos actuales están lejos de hallarse de acuerdo con las necesidades del momento y el costo de la vida. Las últimas mejoras recibidas son irrisorias, casi una burla: basta hacer constar que de 268 pesos, que era el sueldo inicial, se lo llevó a 275 pesos, es decir, un aumento escaso de 7 pesos mensuales.

Repetiré, señores diputados, lo que ya dije en otras ocasiones: no es posible postergar esta solución. El estatuto del magisterio primario es una obra de buen gobierno, que traduce un anhelo de bien público y lleva en sí el elevado y noble propósito de dignificar a los artífices de nuestra cultura nacional.

Quien conozca la obra docente realizada en nuestras escuelas y sepa apreciar el alto espíritu patriótico que anima a nuestros maestros en todos los ámbitos del país, no podrá sino reconocer que son dignos de mayor atención y merecedores de disfrutar una vida libre de estrecheces y privaciones.

En todas las oportunidades he considerado la conveniencia de resolver simultáneamente el problema que afecta por igual a los maestros oficiales y a los maestros particulares. Para ratificarlo hago constar que en mi exposición del mes de diciembre próximo pasado decía: «Considero a los maestros particulares en iguales condiciones, derechos y obligaciones que los de los establecimientos oficiales.»

Bien está, señor presidente, que aprobemos este estatuto que nos llega en revisión de la Cámara de Senadores, por cuanto implica un acto de justicia social, por cuanto significa una reparación para miles de maestros que viven sacrificados y sacrifican sus hogares con sueldos de hambre; pero no olvidemos que la reparación debe ser amplia, que la justicia para ser justicia debe alcanzar a todos por igual. Por lo tanto, contraigamos el compromiso solemne de resolver el problema docente oficial.

Señor presidente: el estatuto del docente clama por su aprobación, lo exigen imperiosas razones de orden social. El proyecto que pre-

senté a principios de julio del año pasado, ya ha dormido bastante en la comisión. Resolvamos de una vez, y en forma definitiva, la situación del maestro argentino, que bien ganado lo tiene. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Arévalo Cabeza. — Señor presidente: estamos tratando una ley que hace que poco a poco vaya llegando la hora de la justicia social para el valiente, abnegado y sufrido maestro de escuela. Ayer fueron mejorados los docentes de las escuelas normales, después los de las escuelas nacionales, en parte los maestros provinciales mediante la equiparación de sueldos, que paulatinamente se va obteniendo debido a las partidas que a ese fin se incluyen en el presupuesto nacional. Hoy, con el estatuto a tratar por esta Honorable Cámara, se mejorará en parte la suerte de los docentes particulares.

Es realmente doloroso tener que usar todavía las denominaciones de docentes de escuelas normales, de escuelas provinciales y de escuelas particulares, estableciendo distingos y diferenciaciones odiosas entre los maestros, soldados civiles del perfeccionamiento argentino, cuando todos por su labor y por su obra deberían estar con una sola denominación: docente argentino. Día llegará en que por una justicia social integral, se designe al maestro con el solo nombre de argentino, con iguales derechos, obligaciones y emolumentos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sí, señores diputados: docente argentino. Así, con orgullo y satisfacción, podrán decirlo los maestros de mi patria, con el aplomo y con la fe con que se dice «militar argentino», pues los hombres de letras, como los hombres de armas...

Sr. Dellepiane. — Con que se decía: «militar argentino», señor diputado.

Sr. Arévalo Cabeza. — ... hacen patria, noble y grande, desempeñando cada uno, con amor y con patriotismo, su sagrado ministerio, cualesquiera sean los institutos y las latitudes del país en que se encuentren.

Los maestros que ejercen en las diversas escuelas argentinas, cualquiera sea la institución a que pertenecen, han debido efectuar los mismos estudios, realizar el mismo trabajo, poner su corazón y su cerebro al servicio de la misma causa social, condicionar su vida a dar a los demás y no sólo a los demás, sino a dar a la parte más noble y sagrada de la humanidad, a los niños, lo mejor de su alma y de su saber, poniendo para ello a contribución su corazón y su cabeza, para sacar así la semilla que han de sembrar en la tierra fértil y virgen de la niñez argentina. Esto indica que no deben los maestros percibir, por una labor común, emolumentos distintos; a igualdad de trabajo debe

haber igualdad de remuneración, cualquiera sea el instituto o colegio en que preste sus servicios. Como maestro argentino propugno por la realización de ese ideal —ideal o anhelo que dejará algún día de ser una utopía para ser una realidad—, la igualdad de los maestros de mi patria.

Por el momento, dentro de esa aspiración, dando este estatuto adelantamos un paso en el camino del mejoramiento, sin que ello quiera decir que él sea para los maestros particulares la panacea que buscan desde tiempo inmemorial. Por ahora, sólo conseguirán mejorar en algo su situación.

La enseñanza particular en el país esta garantizada por nuestra Constitución nacional y llena en la República una evidente acción social, para completa la obra de educación que realiza la Nación. La institución de esta enseñanza nos viene del fondo de la historia, y el genio tutelar de la educación americana, Sarmiento, la propiciaba.

Por todo ello, son dignos de todos mis respetos los colegios e instituciones que imparten enseñanza privada; ellos hacen patria también al lado y paralelamente a los establecimientos oficiales. Contribuyen a facilitar un problema de educación del niño y del joven, y contribuyen también a remediar un problema de trabajo para los docentes.

Ahora bien; en los colegios particulares actúan dos factores bien definidos: el factor económico y el factor profesional. Por el factor económico entran estos institutos dentro del régimen capitalista; por el factor profesional entran dentro del régimen docente; armonizar esos dos factores, que se complementan, es lo indispensable y es lo que debe tratar de hacer el estatuto del docente particular: llevar a estos maestros a la jerarquía social y económica que merecen, sin matar, digamos, para obtener esa jerarquía, a los institutos y colegios particulares. Solucionar el diferendo que puede existir entre el instituto y el maestro, es el problema serio que se plantea y que debe tener una solución equitativa, para que de esa solución no salga herido el maestro en sus justas aspiraciones, ni lesionado el instituto en sus, también, justos derechos. Para ello, debe estar el Estado vigilante, pero vigilante no sólo para castigar o recriminar a unos y otros, sino para remediar y subsanar los diferendos, aunque para ello tenga que extremar el Estado sus aportes pecuniarios.

Si los colegios particulares cooperan con la Nación en la solución del problema educacional del país; si los colegios particulares llenan funciones que debe llenar el Estado, pues el Estado tiene obligación de educar a sus hijos; si los colegios particulares son una prolongación de la escuela oficial por la incorporación

y la enseñanza que imparten, y el Estado obtiene el beneficio de la educación que en sus claustros se hace, a ese socio, cooperador y coadyuvante de su obra, debe el Estado, en mi concepto, facilitarle y remediarle los entorpecimientos que tenga en su desenvolvimiento, tendiéndole la mano, para salvar del naufragio al instituto o colegio que pueda caer por causas económicas.

En el proyecto que se considera, se contempla este aspecto de la cuestión en el artículo 24, cuando establece que el Estado puede contribuir hasta con las dos terceras partes de los sueldos mínimos y, en algunos casos, llega hasta el 80 por ciento; pero es de observar que en los colegios lo que se gasta no es solamente el sueldo: debe gastarse también en pago de alquileres, en luz, en material didáctico, en personal de maestranza, en otorgamiento de vacaciones pagadas, etcétera, y a todo ello debe contribuir también la Nación, cuando no puedan hacerlo los institutos, después de establecer esta circunstancia por controles minuciosos.

Para que la Nación preste esa ayuda amplia que expreso, deberán los institutos demostrar acabadamente, en forma documentada, que sus entradas son escasas, y la Nación fiscalizará debidamente la parte didáctica y la parte económica, para establecer si esa necesidad de ayuda existe, e investigar también si esa falta de recursos obedece a la falta de alumnos o a fallas didácticas.

Lo que en este estatuto no estuviere previsto y las fallas que en la práctica se notaran para su realización, y que hicieran peligrar por una razón económica el funcionamiento de los institutos o de los colegios particulares, o el cumplimiento de lo estipulado en el mismo, podría, como ya lo he dicho anteriormente, subsanarse mediante subsidios de carácter de asistencia social, o de beneficencia, que se acordarían previos los informes favorables del ministerio de Justicia e Instrucción Pública, lo cual no sería, en mi concepto, repugnante ni contradictorio a lo establecido en el artículo 25 de este proyecto de ley.

No es ninguna novedad que la Nación subvencione a los Estados provinciales y a las instituciones o colegios particulares para que impartan la educación popular, y así tenemos que la Nación, por la ley de subvenciones número 463, del año 1871, tiene resuelta la ayuda a las provincias con fondos, para que puedan cumplir el precepto constitucional de enseñar, empeñada la República en su afán de «educar al soberano». Con ese mismo empeño, con esa misma finalidad de «educar al soberano», repito, debe la Nación, respondiendo a un imperativo de la hora de justicia social que vive el mundo y que se está practicando en esta tierra de bendición, como un mandato que nos viene desde el fondo mismo de nuestra historia, sostener y amparar

a los colegios particulares, para que solventen la parte económica, cuando fuere necesario e indispensable, a los fines de que los maestros y profesores de esos establecimientos puedan gozar como los demás —aunque por el momento en forma precaria— de los halagos de la vida, de sus vacaciones muy justas, muy necesarias y muy bien ganadas, y de mejorar sus emolumentos, para que todo ello sirva como un estímulo para el desempeño de sus funciones, y para que puedan también mirar sin sonrojo y sin envidia a sus colegas de las escuelas nacionales y provinciales, a sus colegas y hermanos, que, al igual que ellos, están cultivando el campo fértil y bendito de las conciencias infantiles argentinas.

Para estos servidores de la patria, que forman parte con honor y con dignidad de la noble milicia del magisterio argentino y que tienen, como todos los maestros, pasta de apóstoles y envergadura de héroes, pido la consideración de los propietarios de los institutos particulares y la consideración y amparo que la Nación debe prestar a todos los que hacen, con su acción, bien a la patria.

Por ello, voto complacido esta ley y espero que en el porvenir pueda ser modificada en las partes correspondientes, para mejorarla, con el aporte patriótico, desinteresado y noble de propietarios y maestros de los institutos particulares y del Estado, para bien de la enseñanza y para bien de la Patria.

Señor presidente: de acuerdo a lo solicitado por el señor diputado por la Capital doctor López Serrot, dado el precario tiempo de que se dispone para el tratamiento de esta ley y como un homenaje a los maestros, que me hacen llegar su anhelo de que, aunque imperfecto, este estatuto sea votado hoy, es que voy a adherir a la moción formulada de votar el despacho del Honorable Senado, comprometiéndolo a los maestros para que con su aporte se mejore en el porvenir. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — No habiendo más oradores anotados, se va a llamar para votar.

—Se llama para formar quórum.

Sr. Ravignani. — ¿Hay número en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — En la casa hay 110 señores diputados.

Sr. López Serrot. — Que se pase lista.

Sr. Casas Noblega. — Si no hay número en el recinto, habría que levantar la sesión.

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — Como hay número en la casa, sugiero la conveniencia de esperar unos minutos.

—Después de unos momentos.

Sr. González Funes. — ¿No podríamos tener una información precisa para saber si van a venir los diputados de la mayoría?

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — La Presidencia ha invitado a los señores diputados que están reunidos en el bloque mayoritario para que concurran al recinto.

Sr. Fajre. — Podríamos continuar la sesión en el bloque mayoritario...

—Después de unos momentos.

Sr. Presidente (Díaz de Vivar). — No siendo posible obtener quórum, queda levantada la sesión.

—Es la hora 12 y 47.